

CADERNOS DE TRABALHO NETSAL

V3 #7 | 2015



CHILE EN LA ENCRUCIJADA DE UN NUEVO CICLO

Alexis Cortés

CADERNOS DE TRABALHO NETSAL

Os Cadernos de Trabalho NETSAL são uma nova publicação trimestral do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina (NETSAL) do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ). Esta série, iniciada em 2013, publica estudos que sejam resultados de pesquisas, empíricas e/ou teóricas, afins às linhas e áreas de trabalho do NETSAL. Trata-se de números monográficos que podem tanto discutir resultados de investigações finalizadas como propor novas agendas de pesquisa.

Publicado três vezes ao ano, aceitam-se trabalhos em português, espanhol e inglês. Propostas de textos, de até 50 páginas, podem ser apresentadas ao conselho de redação via email (netsal@iesp.uerj.br), acompanhados de resumo em torno de 120 palavras, em que fique clara uma síntese de propósitos, dos métodos empregados e das principais conclusões do trabalho, além de palavras-chave e mini cv do autor.

Conselho de Redação:

Diretores: Breno Bringel e José Maurício Domingues

Editor: Pedro Borba

Design editorial e diagramação: Carolina Niemeyer

ISSN: 2317-9104

Netsal – Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina

<http://netsal.iesp.uerj.br/index.php/pt/>

IESP – Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua da Matriz, 82, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ CEP: 22260-100. Tel.: +55 (21) 2266-8300

<http://www.iesp.uerj.br/>

CHILE EN LA ENCRUCIJADA DE UN NUEVO CICLO

Alexis Cortés

Doctor en Sociología por el IESP-UERJ y académico del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Contacto: acortes@uahurtado.cl

RESUMEN

Este ensayo busca mostrar el agotamiento del consenso neoliberal que dominó la postdictadura chilena y que convirtió al país andino en uno de los principales laboratorios para la economía neo-clásica en el mundo. Ahora bien, ¿cómo se produjo la erosión de este consenso?, ¿cuáles son los elementos que incidieron en el cuestionamiento de la lógica neoliberal?, ¿cuál fue el papel del movimiento estudiantil en ese proceso? Intentando responder a estas preguntas, este artículo busca caracterizar las tensiones, los desafíos y las oportunidades para el inicio de un nuevo ciclo político que apunte a superar la herencia dictatorial perpetuada en la transición democrática.

INTRODUCCIÓN

Todo sistema económico-social se reproduce en base a dos componentes: convencimiento y dominación. Ningún sistema, sea cual sea su naturaleza, puede sobrevivir únicamente mediante la coacción constante de su población. Necesita también convencerla (o demostrarle) que con la continuidad del mismo y su colaboración, ella misma se ve beneficiada (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2002). Para ponerlos en términos gramscianos, el sistema necesita de hegemonía, es decir, de una forma de legitimidad que convierte el interés de una capa de la sociedad en bien común (GRAMSCI, 2000). Cuando esta hegemonía entra en crisis, la coacción estatal se convierte en un repertorio cada vez más recurrente para asegurar la persistencia de ese modelo.

Lejos de concordar con los vaticinios de derrumbe del modelo chileno (MAYOL, 2012), parecen evidentes hoy en Chile los síntomas de una crisis de hegemonía del neoliberalismo. Lo que antes era visto como legítimo ahora se percibe como injusto y se le condena. En estos momentos, están en tela de juicio varios de los pilares del modelo económico ideado por la dictadura y continuado (o corregido) por los gobiernos democráticos que la sucedieron: la Constitución de la República, el Sistema Educacional, el Sistema Tributario, el Sistema de Pensiones, el Código del Trabajo, el Sistema Electoral, etc. Así lo vienen mostrando diferentes encuestas de opinión pública. En un estudio reciente presentando por el Centro de Estudios Públicos (Septiembre-Octubre de 2013), institución de filiación conservadora que dirige la encuesta más prestigiosa del país, la mayor parte de los entrevistados se manifestó a favor de “Reducir la diferencia de ingresos” (85%), “Nacionalizar el Cobre” (83%), “Educación Universitaria Gratuita” (74%), “Hacer una reforma tributaria” (67%), “Reformar el sistema electoral binominal” (51%) y un porcentaje importante de ellos concordó con la propuesta de una “Asamblea Constituyente” (45%). Todas estas han sido medidas tradicionalmente presentes en los programas de crítica al modelo neoliberal durante la post-dictadura, pero pocos años atrás no contaban con respaldo popular.

Este cambio no puede ser explicado sin considerar la reactivación de la movilización social masiva desarrollada por diferentes actores durante el gobierno de Sebastián Piñera. Pero, sin duda, el actor que más contribuyó a este quiebre del consenso neoliberal fue el Movimiento Estudiantil. Al desvendar el carácter mercantil del Sistema Educacional y evidenciar su condición de reproductor de la desigualdad social, desnudó también la lógica desigual del modelo chileno. Aunque las cifras que convertían a Chile en uno de los países con peor distribución de renta del mundo eran desde hace mucho tiempo conocidas, sólo hoy parecen cobrar sentido en la población, la cual no sólo ha apoyado sostenidamente a los estudiantes en sus reivindicaciones, sino que además da muestras de una desafección cada vez mayor del sistema con el que ayer parecía concordar o, al menos, aceptar.

Una investigación publicada por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile (LÓPEZ; FIGUEROA; GUTIÉRREZ, 2013) mostró que la profunda desigualdad existente en este país se refleja en el hecho de que en Chile el 1% de la población concentra la mayor proporción de los ingresos económicos. Según la conclusión de estos investigadores: “Es realmente en el 1% más rico y sobretodo en el 0,1% y 0,01% más rico donde se concentra el ingreso. Aquí se ha demostrado que aun en base a una estimación conservadora del ingreso de los super-ricos, su participación en el ingreso personal total es extraordinariamente alta, llegando a más de 30% para el 1% más rico, 17% para el 0,1% más rico y más de 10% para el 0,01% más rico en promedio durante el periodo 2004-2010” (LÓPEZ; FIGUEROA; GUTIÉRREZ, 2013, p. 28).

Precisamente, analizando los efectos de la desigualdad económica en la democracia estadounidense, Larry Bartels (2008) mostró el papel corrosivo de la desigualdad económica en la política, configurando un escenario de democracia desigual donde las personas pobres tienen apenas un papel indirecto en la elección de sus representantes, mientras los ciudadanos con más recursos económicos tendrían un rol directo sobre el comportamiento de sus autoridades electas. Lo que se refuerza con este fenómeno es la capacidad de la desigualdad económica para reproducirse en la esfera política, toda vez que terminan por ser electos aquellos candidatos “sensibles” a las demandas de quienes más se benefician con la desigualdad y que son los que más contribuyen al financiamiento de los partidos. Cuanto mayor la riqueza del elector, mayor es la atención del representante a sus demandas. Y es que la desigualdad económica es, en parte substancial, un fenómeno político y no una tendencia económica inevitable, afirma el politólogo norteamericano. En contextos altamente desiguales, es común que la desigualdad económica sea presentada como un fenómeno natural, en el cual la existencia de los muy ricos produce chorreo para las otras clases, siendo esta presencia necesaria para la prosperidad del país, pues existiría una relación positiva entre desigualdad y movilidad social (la desigualdad reflejaría las recompensas a los talentos individuales y a los esfuerzos personales). Sin embargo, no existiría evidencia concluyente que muestre una relación entre desigualdad y redistribución. En el caso chileno, Espinoza y Nuñez (2014) han cuestionado la imagen de la sociedad chilena como “desigual, pero fluida”, mostrando la rigidez de la lógica de movilidad chilena reciente, evidenciando mayores obstáculos para el asenso social. Chile es un país donde las condiciones de origen terminan por definir buena parte del éxito o fracaso de un individuo en su prosperidad económica.

Para el académico brasileño Marcelo Neves (2007), uno de los trazos de América Latina sería la generación de una “ciudadanía inexistente”, por la generalización de las relaciones de sub-integración y sobre-integración en el sistema constitucional de los países periféricos. La sub-integración se caracterizaría por la falta de acceso de un sector de la población a los beneficios del ordenamiento jurídico, pero permaneciendo dependiente, a su vez, de sus prescripciones impositivas, originando una forma negativa de integración definida como sub-ciudadanía. Los sub-ciudadanos no dispondrían del acceso efectivo a los derechos ni a los remedios jurídicos ni a las vías judiciales, pero permanecerían rígidamente subordinados a los deberes, responsabilidades y castigos del sistema.

La sub-ciudadanía sería inseparable de la sobre-integración de los grupos privilegiados, para quienes, en su calidad de sobre-ciudadanos, el aparato jurídico se vuelve un instrumento utilizable siempre que sea favorable para sus intereses particulares, pero, cuando aquél obstaculiza sus pretensiones políticas o económicas, es dejado de lado. La sobre-ciudadanía estaría asociada a una garantía de impunidad, ya que la ley sería usada, desusada o abusada por estos grupos, dependiendo de lo que les convenga en el momento, ya que la sobre-integración permitiría un acceso a los derechos, pero sin necesariamente asumir los deberes y responsabilidades impuestos por el sistema jurídico (NEVES, 1994).

Tanto Bartels como Neves intentan mostrar cómo el poder económico, en sociedades desiguales, es altamente convertible en poder político, pero sin descartar la capacidad de la política para cambiar o mitigar la lógica de las desigualdades. ¿Qué es lo que permite que una situación desigual pase de ser considerada legítima a injusta?, ¿qué procesos operan en este tránsito? Sin duda, en Chile se observa un resurgimiento de la política como espacio de disputa de proyectos de futuro y como arena potencialmente fructífera para la superación de lo que se considera injusto. El

movimiento estudiantil, como ya se afirmó, fue determinante para esta politización, pero, inesperadamente, la elección de un mega empresario que representaba la radicalización de la política como quehacer eminentemente tecnocrático o como práctica gerencial, terminó por estimular la reemergencia de un debate público donde la sociedad organizada y los movimientos sociales salían de su ostracismo político para entrar en escena con marcado protagonismo.

El modelo de (sub)desarrollo chileno, para usar una categoría de los teóricos de la dependencia (GUNDER FRANK, 1973), más que producir bienestar para el país, ha producido super-ricos que han concentrado y acumulado la mayor parte de la riqueza nacional (FAZIO, 1997). El gobierno de Sebastián Piñera se mostró absolutamente incapaz de construir hegemonía, sobrestimando la inercia de la ya existente y desnudando la parcialidad que la animaba. En otras palabras, el interés de aquellos sectores que han sido los grandes beneficiarios del sistema, ahora se percibe como tal y no como el interés común de la sociedad. La llegada a La Moneda de uno de estos super-ricos los sobreexpuso al escrutinio público. No sólo el conflicto de interés se banalizó en buena parte de los nombramientos de cuadros claves del gobierno piñerista, comenzando por el mismísimo Presidente de la República, quien sólo de manera parcial y tardía se deshizo de sus inversiones y empresas bajo la figura de un fideicomiso ciego que aún sigue generando polémica y cuestionamientos; es más, muchos de los funcionarios nombrados por él actuaron abiertamente beneficiando a sus ex patrones o a sus antiguas empresas, siendo los casos más emblemáticos el de las Universidades privadas que han violado la ley al lucrar con la educación o la condonación de deudas millonarias a las empresas del *retail* por parte del ex director del Servicio de Impuestos Internos durante su gobierno. Esta situación ha abierto también un flanco de crítica retroactiva hacia los personeros de la antigua Concertación que han hecho de los directorios de las grandes empresas su sala de espera hasta un nuevo nombramiento público, visibilizando una dimensión de la relación entre poder económico y política que ya se había naturalizado.

¿Se encuentra Chile a las puertas de iniciar un ciclo post-neoliberal? En otras palabras: ¿el cuestionamiento del consenso neoliberal que imperó en Chile desde la Dictadura será suficiente para abrir paso para un proyecto político que implique situar a Chile en la estela de los procesos reformistas iniciados en el continente o, al menos, significará una retomada de la tradición progresista del país andino hasta iniciada la Dictadura Militar de 1973? Estas preguntas cobran fuerza hoy cuarenta años después del Golpe Militar que interrumpió el proyecto de transición pacífica al socialismo encabezado por Salvador Allende, lo que ha supuesto la instalación de debates antes silenciados en la esfera pública chilena, tales como la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura y las políticas de desmemoria durante la transición democrática.

Desde la década de 1990, Chile ha sido señalado como un “modelo exitoso” de tránsito de una situación de atraso para una inserción competitiva en el mercado internacional globalizado, por su estabilidad política, dada por la presencia durante veinte años de gobiernos de centro-izquierda hasta el triunfo de Sebastián Piñera, y por su disciplinada aplicación y mantención de fórmulas neoliberales para administrar su economía. Manuel Castells lo sintetiza así: “el modelo perfecto de los ideólogos del libre mercado (orientado en los años 1970 por los “Chicago Boys” y apoyado por el FMI en la dictadura de Pinochet) es, de hecho, un caso exitoso de transición a una nueva estrategia de crecimiento impulsada por las exportaciones” (CASTELLS, 1999, p. 41). Esta conjunción de centro-izquierda y modelo neoliberal en una economía social de mercado hicieron de Chile, para algunos autores (CASTAÑEDA,

2006), la personificación de lo que una “buena” izquierda debía representar frente al populismo y la irresponsabilidad fiscal de la izquierda “errónea” (Chávez, Morales, Correa, etc.). Así, mientras la dinámica de los países latinoamericanos, durante la última década, ha sido marcada por un debilitamiento de la hegemonía neoclásica y por la retomada de nociones de intervención estatal en la economía, configurando una agenda neodesarrollista que reconsidera al Estado como regulador de las asimetrías reproducidas por el mercado y como garante de la inclusión social (BOSCHI, 2011), Chile parecía permanecer ajeno a esta tendencia. Sin embargo, esta correspondencia supuestamente virtuosa comenzaba a dar muestras de agotamiento ya con la elección del derechista Sebastián Piñera, lo que vino a profundizar los cuestionamientos al sistema neoliberal chileno, hasta ese momento exitosamente presentado no sólo como el camino correcto para llevar a Chile al desarrollo, sino además como la “vía natural” para concretar tal tarea. Con la rebelión estudiantil de 2011 y el surgimiento de una serie de conflictos regionales que han traído a escena a una ciudadanía crítica que exige ser escuchada, el otrora exitoso modelo chileno empezó a ser desmitificado. ¿Puede Chile seguir siendo considerado como el modelo a seguir por los países del continente para alcanzar el desarrollo?

En este ensayo pretendo desvendar cómo se gestó este quiebre y cuáles pueden ser sus eventuales consecuencias para la coyuntura política chilena, tomando en consideración la elección presidencial que ha instalado nuevamente en 2014 en La Moneda a la socialista Michelle Bachelet, esta vez con una coalición de gobierno que ha crecido hacia la izquierda con la incorporación del Partido Comunista a su base de apoyo. Algunas de las preguntas que guiarán esta reflexión serán: ¿Cuál fue el papel del movimiento estudiantil chileno en este proceso? y ¿cuáles fueron las responsabilidades del gobierno de Sebastián Piñera para facilitar este quiebre? Para tal ejercicio resulta indispensable antes mostrar cuál es el origen, así como las limitaciones del modelo chileno de desarrollo.

LOS ORÍGENES AUTORITARIOS DEL MODELO NEOLIBERAL EN CHILE

Para Manuel Castells (2005), Chile fue el escenario de implementación de dos modelos basados en la apertura económica y en la centralidad del mercado como asignador de recursos. Por un lado “el modelo autoritario liberal excluyente”, instaurado durante la dictadura del General Pinochet (1973-1989), basado en la marginación de los beneficios del crecimiento de parte importante de la población, a través del ejercicio autoritario e incontrolado del poder del Estado y donde su presencia con políticas correctoras de las desigualdades sociales prácticamente desaparece. Y, por otro lado, “el democrático liberal inclusivo”, organizado desde un Estado democrático que mantiene el papel central del mercado en la distribución de recursos, pero estando abierto a la aplicación de políticas públicas con el objeto de generar condiciones de inclusión de la población a los beneficios del progreso económico, principalmente a través de un incremento significativo del gasto social. Castells no duda en atribuir la exitosa inserción de Chile en el contexto global a la estabilidad institucional de su sistema democrático, el que le habría dado legitimidad a su estrategia de apertura económica y equilibrio macroeconómico.

Sin embargo, cabe preguntarse lo siguiente: ¿el hecho de que el sistema neoliberal haya alcanzado su apogeo de legitimidad durante el período democrático es suficiente razón para diferenciarlo del modelo implementado durante la dictadura? Sin duda, la variable democracia contribuyó a la legitimación del modelo económico,

pero los patrones de acumulación y la estrategia de inserción se mantuvieron prácticamente inalterados, a saber, una lógica neoclásica de crecimiento sustentada en la exportación de productos primarios, siendo el principal de ellos el Cobre, aunque con una diversificación de productos también de origen primario (otros minerales, vinos, frutas, madera, etc.) (CORTÉS, 2012). O sea, un modelo reprimarizado que, pese a la emergencia de nuevos productos de exportación, aún continúa teniendo como origen la explotación de fuentes primarias de riqueza, otorgándole un papel subordinado a Chile en la división internacional de la economía y, en particular, en la generación y aplicación de tecnologías y nuevas formas de producción (AMSDEN, 2001). Realidad que pone en duda la pertinencia de situar a Chile como una alternativa viable de desarrollo económico para otros países de la región, pues, no obstante los altos índices de crecimiento económico, favorecidos por los altos precios de *commodities* en el mercado internacional gracias sobre todo a la demanda China, principalmente de Cobre, parece claro que una estrategia reprimarizada de exportaciones con baja aplicación o desarrollo de tecnología es insuficiente para dar cuenta de los desafíos que esta fase de la modernidad presenta a las diferentes realidades nacionales (DOMINGUES, 2009).

A favor del argumento de Castells de diferenciar los dos modelos de desarrollo, se podría afirmar el incremento significativo de políticas sociales durante los gobiernos democráticos. Efectivamente, durante los gobiernos de la Concertación, coalición de centro-izquierda que gobernó durante veinte años Chile después de la dictadura, el gasto social fue incrementado sustancialmente y además se redujeron drásticamente las cifras de pobreza y marginalidad heredadas de la dictadura. Sin embargo, esta vigorosa política social se realizó en base a una lógica de focalización del gasto público, es decir, concentrada en aquellos sectores más golpeados por el modelo económico, lo que permitió mejorar las cifras sociales, pero sin alterar las enormes desigualdades sociales que sitúan a Chile como uno de los países poseedores de uno de los peores índices de Gini en el mundo. Eso porque esta política social no vino de la mano de una recuperación de las lógicas de bienestar social ni de la arquitectura de derechos existentes en el país antes de la dictadura. En este sentido, aunque las diferencias de políticas sociales entre el régimen autoritario y los gobiernos democráticos son notables, en la medida que responden a una lógica neoliberal de focalización de la intervención pública en vez de la ampliación de derechos universales resulta difícil considerar esta variable como un elemento lo suficientemente determinante para establecer dos modelos diferentes de desarrollo. Según Manuel Antonio Garretón (2012), estamos en realidad ante un modelo de neoliberalismo corregido y progresismo limitado que dejó una deuda democratizadora pendiente durante los gobiernos de la Concertación.

Por otro lado, hablar de dos modelos económicos en Chile no deja de ser una postura indulgente frente al neoliberalismo, pues, en la medida que se separa aguas entre dictadura y democracia, de una cierta manera se le extirpa de su pasado negativo: la traumática forma como fue impuesto durante los años 1970 y así se le absuelve de su pecado de origen. Por más democrático que haya sido su desarrollo durante los 1990, muchas de las reformas que hicieron posible una política económica de ese tipo sólo habrían sido factibles bajo condiciones excepcionales de autoritarismo, sin oposición ni capacidad para que la ciudadanía pudiese manifestarse frente a la arquitectura económica neoliberal impuesta durante la dictadura.

En *La Doctrina del Shock*, Naomi Klein (2007) describe lo que entiende como el capitalismo de desastre neoliberal, estableciendo una relación directa entre la instauración del libre mercado y el poder de *shock* de situaciones de excepción, tales

como los golpes de Estado. La ocurrencia de crisis o estados de *shock* serían condición necesaria para el éxito de la aplicación de políticas neoliberales. Sólo en estas condiciones es posible la venta de los pedazos de la red estatal a agentes privados, por el pasmo en el que se encuentran los ciudadanos por el trauma social detonado por la situación de excepción (desastre natural, crisis económica, crisis política, etc.). Este paréntesis que alteraría las condiciones normales de funcionamiento democrático permitiría que algunas “reformas” neoliberales se tornen permanentes. Según Klein, eso sería lo que aconteció con Chile durante la Dictadura de Pinochet. Dirigidos intelectualmente por el Nobel de Economía Milton Friedman y por sus seguidores locales formados en la escuela de Chicago, en este país fueron aplicadas una serie de radicales reformas que implicaron una de las transformaciones capitalistas más extremas vistas en algún lugar (VALDÉS, 1995). Si bien es cierto que un modelo económico neoliberal puede imponerse en regímenes democráticos, lo haría sólo de manera parcial. La excepcionalidad y el autoritarismo que le acompaña en determinados contextos, por el contrario, le otorga carta blanca para su aplicación extrema. De esta manera, incluso la violación a los DDHH puede ser considerada como un engranaje funcional a la aplicación de estas reformas: “Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las “reformas” radicales que habrían de traer el ansiado libre mercado” (KLEIN, 2007, p. 31).

¿De qué otra forma hubiera sido posible instaurar el más radical ajuste neoliberal en uno de los países latinoamericanos con uno de los movimientos obreros más fuertemente organizados, con arraigados partidos de izquierda y una sociedad híper-movilizada (LANDSBERGER; MCDANIEL, 1976), sino mediante una de las más salvajes dictaduras militares del continente? Además, Chile se había convertido en el epicentro de la intelectualidad “desarrollista” latinoamericana (BEIGEL, 2013) mediante la instalación de centros de pensamiento multinacionales como CEPAL y FLACSO, lo que, sumado a la atracción generada por un sistema político estable, pero que al mismo tiempo ofrecía proyectos políticos transformadores bastante creativos como “la revolución en libertad” del demócratacristiano Eduardo Frei Montalva y “la vía chilena al socialismo” de Salvador Allende (CASALS, 2010), hicieron del país andino un polo de atracción de lo más granado de la intelectualidad crítica latinoamericana (DEVÉS VALDÉS, 2004). Todos estos elementos habían convertido a Chile en una especie de capital del “paradigma latinoamericano” con Raúl Prebisch a la cabeza y que establecía como principio normativo la necesidad de contribución del Estado al ordenamiento del desarrollo económico en las condiciones de la periferia latinoamericana (BIELSCHOWSKY, 1998).

Sin embargo, pese a esta hegemonía cepalina, hubo detractores que desde 1956 en adelante, gracias a un acuerdo entre la facultad de economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago, se formaron en un programa de postgrado de alta calidad bajo el alero intelectual de Milton Friedman. Los “chicago boys”, como se les conoció, formaron un grupo académicamente compacto y con una fuerte impronta mesiánica, quienes cultivaban una concepción del papel del economista como un “reformador radical” que, dotado de los conocimientos de una ciencia objetiva económicamente pura, busca transformar el mundo a partir de una visión bastante particular de “lo natural” (GÁRATE, 2012a). Si bien sus posiciones eran marginales en el campo de las ideas hasta el inicio del golpe, ganaron fuerza con la adopción del General Pinochet de este modelo de desarrollo como propio,

en el intento de afirmar su poder al interior de la Junta Militar. Es más, Pinochet fue el último en incorporarse al plan de derrocamiento de Allende y posteriormente vio en los “chicago boys” una oportunidad de escudarse en un proyecto, dando un golpe interno frente a los militares más proclives a ideas económicas más proteccionistas (VALDIVIA, 2003). Con ello, el Golpe Militar dejaba de ser una intervención transitoria que buscaba enrielar el país hacia su curso normal frente al caos provocado por el experimento marxista y asumía características refundacionales, siendo los “chicago boys” los profetas de ese nuevo orden. La ola neoliberal en Chile comenzó como una fórmula de reestructuración económica, pero rápidamente se convirtió en una receta global para la organización de la sociedad, por ejemplo, en las relaciones laborales, en la previsión social, en la educación y en la salud.

Ahora bien, este proceso de refundación neoliberal contó con condiciones favorables de aplicación en el contexto global. Para J.N. Pieterse (2001), fenómenos como la globalización y la regionalización superaron la anterior idea de desarrollo. En esta línea, por ejemplo, el agente convencional del desarrollo, el Estado, fue sustituido por el papel de las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial) y por las fuerzas de mercado, generalizándose las políticas de ajuste estructural y las exigencias universales de la economía neoclásica. Esto ya que el neoliberalismo, en tanto representa un retorno a una visión económica neoclásica, se opone a los fundamentos del desarrollo. El desarrollo para el neoliberalismo, en el sentido de intervención gubernamental, pasaría a ser un anatema que significa distorsión en el mercado. Ahora el objetivo central del neoliberalismo, el crecimiento económico, se alcanzaría mediante: reformas estructurales, desregulación, liberalización y privatización; elementos que, en su conjunto, contribuirían a la reducción de las distorsiones en el mercado.

Todo proyecto de desarrollo supone una disputa sobre lo que se entiende por mejoras y por el desarrollo mismo. Sin embargo, el neoliberalismo en Chile fue exitoso en su intento de presentarse como inevitable e, incluso, como deseable (KIELY, 2006). Según la sugerente fórmula de Paul Singer (1998), la trayectoria económica chilena, al igual que la latinoamericana, pasó de una *dependencia consentida* (en los comienzos republicanos y bajo la lógica del crecimiento “hacia fuera”) a una (*mal*) *tolerada* (período desarrollista de crecimiento “hacia dentro”) para finalmente desembocar en una *dependencia deseada* (período neoliberal). En otras palabras, las recetas neoliberales en muchos lugares, incluyendo Chile, se aplicaron bajo el supuesto de que esas políticas eran el resultado natural del desencadenamiento de las fuerzas económicas y sociales y no el producto de una decisión política o, específicamente, de un proyecto particular de desarrollo que, como cualquier otro, puede ser tematizado. Refiriéndose al neoliberalismo a partir del caso europeo, Pierre Bourdieu señalaba que: “Esta teoría tutelar es una pura ficción matemática basada, desde su mismo origen, en una formidable abstracción, que, en nombre de una concepción tan estrecha como estricta de la racionalidad, identificada con la racionalidad individual, consiste en poner entre paréntesis las condiciones económicas y sociales respecto a las normas racionales y de las estructuras económicas y sociales que son las condiciones de su ejercicio” (BOURDIEU, 2002, p. 10). La instauración del neoliberalismo iría de la mano con un cierre de lo político. Las decisiones colectivas pasan de materia de deliberación a un ámbito de definición exclusivamente técnico donde lo social no tiene cabida: “Cuando los liberales critican la política, la expansión de la política, lo que critican es la socialización de la política, la expansión de lo social. El neoliberalismo es el pensamiento de la reducción de lo social, el renacimiento del miedo a lo social. El neoliberalismo es un pensamiento y una acción de desmontaje de los escenarios de democratización modernos (...) Retrotrae a los individuos desde los espacios de

deliberación a los del cálculo privado” (TAPIA, 2008, p. 16). Esta “formidable abstracción” tuvo en Chile una extraordinaria capacidad para naturalizar el darwinismo social como principal forma de coordinación social, mediante la privatización del riesgo social, la reducción del Estado a su expresión más mínima y la coronación, casi sin contrapesos, de la soberanía del mercado sobre todos los ámbitos de la vida social.

Contribuyó para este fenómeno el hecho de que parte importante de los economistas de CIEPLAN, el organismo referencia de crítica económica a la Dictadura, una vez iniciada la transición democrática, pasaron a defender las mismas orientaciones económicas, pero ahora desde posiciones de toma de decisión pública (GÁRATE, 2012b). Más que absorber la crítica, como normalmente lo hace el capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2002), el neoliberalismo incorporaba a sus críticos, quienes reconocieron en el mercado el principal distribuidor de recursos, atribuyéndole al Estado apenas un papel subsidiario, privilegiando los equilibrios macroeconómicos. Así, se separaba la crítica política de la crítica económica a la dictadura y se le reconocía su legado positivo en este ámbito.

El economista Gabriel Palma (2014), resumiendo la actitud de los nuevos administradores del sistema económico, señaló lo siguiente en una entrevista publicada por el periódico Estrategia: “Hay que acordarse que en el discurso hegemónico de la así llamada centro-izquierda, no hay ni siquiera inquietud en cuanto a pensar en modelos más efectivos de desarrollo. Mientras se siga tomando pasivamente la inspiración en el neoliberalismo, no puede ser de otra manera, pues la única forma en que dos bloques políticos piensen básicamente lo mismo en este tema, es que sólo uno esté pensando. Y una vez que la centro-izquierda tiró la toalla en cuanto a su imaginación crítica, su autoestima se concentró casi exclusivamente en sus capacidades administrativas, su preocupación por lo social -ya con rendimientos decrecientes- y su sentido de prudencia en lo posible”. Pero, las nuevas autoridades en la post-dictadura no se dedicaron sólo a administrar la “economía social de mercado”, sino que la ampliaron privatizando las últimas empresas estatales (salvo CODELCO), firmando una serie de Tratados de Libre Comercio, siendo el más importante el sellado con Estados Unidos (FAZIO, 2006) y desnacionalizando la propiedad del Cobre (CAPUTO; RADRIGÁN; GALARCE, 2003).

Las cifras económicas mostradas durante la transición democrática mostraban un crecimiento significativo de la economía, un mejoramiento notable de las cifras sociales en relación a la Dictadura y una estabilidad política sustentada por una coalición de centro-izquierda que se esmeraba por dar muestras de moderación. Al mismo tiempo, este contexto favoreció el acceso de los chilenos a una serie de bienes materiales, principalmente gracias a la posesión casi sin filtros de tarjetas de créditos que multiplicaron la capacidad de compra de nuevos consumidores ávidos de nuevos artefactos y marcas. Era un modelo cuya hegemonía nacía casi directamente de las tarjetas de crédito que, si bien los endeudaba, creaba la ilusión de un paraíso para el consumidor. Todos estos factores llevaron a que el modelo chileno adquiriese estatus de exportable. Chile era el “Jaguar de Latinoamérica”, la versión sudamericana de los “Tigres Asiáticos”. Aunque claro, en ese relato se omitía el hecho de que el salto de los países asiáticos no obedeció a la aplicación de políticas neoliberales, pues el milagro de “los tigres” respondió más a una estrategia proteccionista de sustitución de importaciones, donde la industria fue desarrollada a través de medidas de protección doméstica, conjugadas con sólidas políticas de reforma agraria que redistribuyeron la tierra entre productores, aboliendo las clases latifundistas (KIELY, 2006). Asimismo, la extrema vulnerabilidad frente a la inversión externa hizo de la economía chilena uno de los principales países afectados por la crisis asiática, lo que si bien pudo signi-

ficar una primera fractura en ese consenso neoliberal, fue rápidamente superada con una respuesta dentro de los mismos códigos del sistema. Si Chile se ha visto perjudicado con la crisis asiática es porque aún precisa “neoliberalizar” aún más su mercado. Es así como Chile se consolidaba como un “páramo para el ciudadano” y un “paraíso para el consumidor” (MOULIAN, 2002).

EL MODELO POLÍTICO

Políticamente, una transición democrática pactada con los sectores pinochetistas derrotados en el plebiscito de 1988 estableció un limitado radio de acción para eventuales reformas a la herencia dictatorial. Durante los primeros años del retorno democrático, la figura del ex Dictador tuvo marcado protagonismo en la política nacional, primero como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y posteriormente como Senador Vitalicio, en su calidad de ex Presidente, gracias a una cláusula de la Constitución que él mismo aprobara y que continuó vigente tras su derrota electoral. A las Fuerzas Armadas les cabía un rol tutelar en esta democracia protegida. La joven democracia chilena parecía permanentemente amenazada y para preservarla había que echar mano de la política de los consensos, con el económico al frente de todos. Para ello fue necesario también desmovilizar a buena parte de las fuerzas sociales que habían hecho factible el “No” a Pinochet en el plebiscito. Lo posible se redujo a estrechos márgenes en donde permanecían activos enclaves autoritarios legados por la dictadura militar en lo económico, político e institucional. De esta manera, la política se volvió un campo especializado administrado por tecnócratas, desprovisto de participación de la sociedad civil o donde al menos ésta se reducía al poder de veto de un sector específico: los grandes empresarios.

En 1997, Tomás Moulian publicaba *Chile Actual: anatomía de un mito*, obra que buscaba desmitificar los principales presupuestos de la transición chilena y que tuvo el mérito de transportar la crítica al neoliberalismo desde los márgenes de la academia al gran público chileno, convirtiéndose en un best-seller sorpresivo si se considera que en la época el modelo chileno gozaba de buena salud (ARIZTÍA; BERNASCONI, 2012). Moulian define en ese libro a la transición chilena como un complejo acto de transformismo político. En sus palabras: “Llamo “transformismo” al largo proceso de preparación, durante la dictadura, de una salida destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos, las vestimentas democráticas. El objetivo es el “gatopardismo”, cambiar para permanecer. Llamo “transformismo” a la operación en el Chile Actual se realizan para asegurar la reproducción de la “infraestructura” creada durante la dictadura, despojada de las molestas formas, de las brutales y de las desnudas “superestructuras” de entonces. El “transformismo” consiste en una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del cambio de Estado. Este se modificó en varios sentidos muy importantes, pero manteniendo inalterado un aspecto sustancial. Cambia el régimen de poder, se pasa de una dictadura a una cierta forma de democracia y cambia el personal político en los puestos de comando del Estado” (MOULIAN, 2002, p. 141).

Para que este ejercicio de “gatopardismo” fuese posible, era necesario estimular el olvido del pasado, iniciando un proceso de bloqueo de la memoria y donde pasado y futuro aparecían como incompatibles. Bajo este raciocinio, para avanzar hacia el futuro era imprescindible negar el pasado incómodo. Por eso Moulian planteó que el consenso de la transición representaba una etapa superior del olvido: “El consenso es un acto fundador del Chile Actual. La constitución, la producción de ese

Chile venía de lejos. Pero la declaración del consenso manifiesta discursivamente la decisión del olvido absoluto. De olvidarlo todo, también lo que se había pensado y escrito sobre el Chile pinochetista” (Moulian, 2002, p. 43). La asimilación de los críticos al neoliberalismo de la dictadura a los presupuestos neo-clásicos en democracia representaría un acto análogo al de Fernando Henrique Cardoso cuando pronunció el “olviden todo lo que escribí” al asumir la primera magistratura brasileña.

El consenso también era el resultante de una sociedad atemorizada por los traumas autoritarios, la que frente a la mínima posibilidad de reactivación y reconstrucción de su fuerza movilizadora encontraba como respuesta las “razones de Estado”, las que operaban como formas de temor regresivo que encasillaban toda divergencia en la categoría de lo irracional, de aquello que ponía en peligro la sobrevivencia de la transición. Las “razones de Estado” contribuyeron así a construir los fundamentos de una “transición paradigmática” sustentada en el olvido y la desmovilización. Otra vez según Moulian, “el anuncio y continua glorificación del consenso, la gran novedad discursiva del Chile Actual, tiene estrecha relación con las estrategias de blanqueo, con la construcción de la imagen del Chile Modelo. Forma parte de la fabricación de un montaje del milagro de Chile. Ese milagro consiste en la demostración de que se podía pasar de la desconfianza y de la odiosidad del período de la lucha, al acuerdo perfecto de la transición. Todas las élites, con la notoria excepción de algunas pocas “cabezas calientes”, habrían actuado en estado de gracia, inspirados por la razón. Se ubicaron – se dice – en la “realidad”, en la aceptación de las restricciones históricas. En verdad se ubicaron en lo que ellos, los fundadores del Chile Actual, denominaron siempre, desde 1975 o incluso antes, lo racional. Lo mismo que nosotros combatimos como obra de Pinochet” (MOULIAN, 2002, p. 43).

La movilización social no podía ser usada como una forma de presión para ensanchar los límites de lo posible. Al contrario, representaba una amenaza que podía despertar nuevamente el demonio de la Dictadura. Según Francisco Zapata (2004), la transición chilena desde la dictadura hacia una democracia protegida se sustentó en la ausencia de sociedad civil organizada en el debate público sea a través de los medios de comunicación o a través del debilitamiento de los espacios de expresión que anteriormente utilizó (sindicatos, partidos, juntas de vecinos, etc.). El pacto inter-élites que permitió este proceso tuvo como resultado la consolidación de un orden democrático de baja calidad, que, según Cristóbal Rovira (2007), se articuló en torno a tres ejes: a) la conformación de elites cerradas y, por tanto distanciadas de la ciudadanía, la toma de decisiones colectivamente vinculantes se vuelven espacios de negociación elitista sin control público; b) el establecimiento de una ortodoxia del libre mercado que consolida el poder de veto de los grupos económicos por sobre las reglas democráticas; y c) la tardía confrontación del legado autoritario, sólo la detención de Pinochet en Londres permitió cuestionar la inmunidad política y penal que el pacto de transición pareció asegurarle al ex dictador y a su familia. Como consecuencia: “El resultado de los pactos inter-elites ha sido entonces el establecimiento de una democracia formal a costa de la expansión del ejercicio de la soberanía popular” (ROVIRA KALTWASSER, 2007, p. 365). A pesar del constante crecimiento económico que experimentó Chile tras el retorno a la democracia, en buena medida porque esta última priorizó la dimensión económica del bienestar, el régimen político muestra limitaciones institucionales y políticas que han terminado por restringir el poder de los ciudadanos, configurando una democracia “semi-soberana” (HUNEEUS, 2014).

Por otra parte, las restricciones dadas por el sistema electoral, que sobrerrepresentaba a la derecha en el Congreso gracias al sistema binominal heredado de Pinochet, limitaban realmente las posibilidades del conglomerado de centro-izquierda

en el poder para establecer reformas que superasen la arquitectura dejada por la dictadura. Al mismo tiempo, inviabilizaba la emergencia de cualquier alternativa al binomio derecha-concertación, factor que fue utilizado como una eficiente herramienta electoral por parte de la coalición de gobierno frente a las eventuales críticas surgidas a su izquierda: “la única opción que tienen es votar por nosotros para que la derecha no vuelva al poder”.

En ese contexto, Concertación y Derecha no sólo se aproximaron electoralmente – el margen de votos que los separaba se fue estrechando –, sino que además se fueron acercando en su forma de concebir la política, alimentadas y estimuladas por el eterno empate entre estas dos fuerzas consagrado por el sistema electoral binominal. Como la Concertación requería del concurso de sus opositores para aprobar cualquier ley propuesta por el gobierno – ya que el sistema electoral la condenaba a este empate permanente en el Congreso –, la centro-izquierda inició un proceso de concesiones políticas que hacía a ambas coaliciones cada vez más convergentes. La Concertación asumió como propios los criterios definidos por la derecha para evaluar a un buen gobierno: gobernabilidad, estabilidad, eficiencia, focalización, etc. Ahora bien, durante los gobiernos de centro-izquierda continuó operando el clivaje plebiscitario que básicamente definió la transición post-dictadura (TIRONI; AGÜERO; VALENZUELA, 2001), es decir, aquellos que votaron “No” a la Dictadura continuaron votando “Concertación” y los que votaron “Sí”, apoyando a la Derecha.

Dicho de otra manera: en el marco de la política de los consensos el principal elemento diferenciador del eje Concertación-Derecha fue la postura que estas alianzas asumieron a la hora de enfrentar el plebiscito que derrotó a la Dictadura de Pinochet. Sin embargo, en la elección presidencial del 2009 que enfrentó al ex Presidente concertacionista Eduardo Frei Ruiz-Tagle contra Sebastián Piñera como representante de la derecha, este clivaje perdió fuerza, puesto que Piñera fue capaz de conquistar a un electorado anteriormente concertacionista dispuesto a votar por un candidato que, pese a venir de la derecha, ostentaba un pasado democrático. Piñera había votado “No” en el plebiscito y prometía no incluir en su gobierno a personeros vinculados a la Dictadura (algo que finalmente no se cumplió). Por otra parte, la Concertación daba muestras de fatiga tras veinte años en el poder, mostrándose incapaz de traspasar la enorme popularidad de la Presidente Michelle Bachelet a la coalición y al candidato oficialista. Asimismo, la fuga de militantes hacia la derecha y hacia la izquierda reflejaba que el ciclo de la más exitosa coalición política en la historia de Chile llegaba a su fin. Efectivamente, importantes personeros como el ex presidente de la Democracia Cristiana Adolfo Zaldívar y el ex Ministro de Salvador Allende y entonces Senador Fernando Flores no sólo abandonaban la Concertación para fundar sus propios partidos como manifestaban apoyo público a la candidatura de Piñera. Desde la izquierda, la candidatura de Marcos Enríquez-Ominami, quien renunció al Partido Socialista ante la negativa de este partido de realizar primarias para dirimir a su candidato presidencial, significó un enorme debilitamiento de la candidatura del oficialista Frei Ruiz-Tagle. Por otra parte, la candidatura de otro ex socialista, Jorge Arrate (ex Ministro de Allende y del propio Frei y uno de los principales ideólogos de la renovación socialista que posibilitó la conformación de la Concertación), quien se presentó como candidato del Partido Comunista, también contribuyó a agudizar la crisis de la coalición de gobierno.

La llegada de un mega-empresario como Sebastián Piñera podría haber hecho pensar que se iniciaba un nuevo ciclo de consolidación del neoliberalismo. Algunos de sus personeros, pese a su promesa de campaña, fueron los que contribuyeron a la implementación del neoliberalismo en Chile durante el régimen de Pinochet y ahora

retornaban triunfantes en un contexto democrático. Al mismo tiempo, la figura de Piñera representaba la radicalización de la política tecnocrática. A final, nadie mejor que un exitoso empresario para dirigir el país con criterios gerenciales. Sin embargo, el inicio de su gobierno no podría haber sido más adverso: el 27 de febrero de 2010 poco antes de que Piñera asumiera el mando de la nación, Chile era sacudido por uno de los terremotos más intensos de su historia, remezón telúrico que dejó expuestas varias de las fallas del exitoso modelo chileno.

EL TERREMOTO Y EL MITO DE CHILE

La idea de “terremoto social” fue la más utilizada para describir los saqueos producidos en las zonas afectadas por el movimiento telúrico en el Centro y Sur de Chile (AGUILERA, 2010). Aunque es un concepto que ha comenzado a ser cuestionado (CÁCERES; MILLÁN, 2012), posee el mérito de sintetizar bien el asombro con el que la sociedad chilena observó los efectos sociales post-sismo. Estupor también compartido por parte importante de la intelectualidad chilena, tal como Grinor Rojo quien, al examinar los saqueos, expresó: “Y esto es algo que estaba ocurriendo en Chile, el 1 de marzo de 2010, a pocas horas del terremoto más devastador que el país haya sufrido en cincuenta años. No unas cuantas docenas de delincuentes o unas cuantas docenas de vándalos, asolando pueblos y ciudades, sino una muchedumbre de hombres y mujeres, dentro de la cual había personas que era como usted o como yo, “gente común y corriente”, a la caza o de lo que necesitaban, porque tenían hambre y sed, o de lo que no necesitaban, pero que sí les apetecía porque habían estado deseándolo desde hacía un largo tiempo (...) o, peor aún, que les apetecía para poder lucrar con ello en el cuadro de desabastecimiento y penuria que provocaba la emergencia” (ROJO, 2010, p. 107).

Los efectos de los saqueos eran devastadores, en algunos casos superaban a los daños provocados por el propio terremoto y maremoto. ¿Por qué un país como Chile que mostraba índices económicos envidiados por el vecindario ante una tragedia como esa se comportaba de tal manera, mientras que Haití en la antípoda de los rankings de desarrollo, pese a sufrir también efectos catastróficos de un terremoto no mucho antes del chileno no presentó fenómenos comparables en magnitud a los saqueos en el país andino? Es lo que se preguntaba el ensayista. Los saqueos serían, para algunos autores (GARCÉS, 2010), la manifestación de una “crisis social” detonada por el terremoto, es decir, una generalización de acciones directas conducentes a un “desborde social” o “reventón histórico”, que poseería la característica de ser “... indicativa de una crisis que desnuda, visibiliza o hace estallar en la superficie profundas grietas, o mejor, para usar un lenguaje sismológico, extensas “placas” sociales que se reacomodaron y movilizaron en lo profundo de la sociedad” (GARCÉS, 2010, p. 77).

En la literatura latinoamericana, existe una cierta tendencia a atribuir a estas expresiones un cierto potencial emancipatorio por representar formas de acción política sin intermediaciones, en donde su espontaneidad asegura un alto grado de autenticidad popular (MOISÉS, 1982; SALAZAR, 2006). Sin embargo, por más que los saqueos puedan ser en buena medida una expresión de rabia contenida o que puedan ser explicados por la desigualdad social existente en el país, es difícil ver en estas expresiones algún tipo de potencial político anti-sistémico. Por el contrario, la “crisis social” post-terremoto pareció agudizar la normatividad neoliberal y, en buena medida, los saqueos respondieron a un oportunismo radical: sacarle el máximo provecho económico a la tragedia. Aunque en parte los saqueos fueron una respuesta a la tar-

día reacción de las autoridades gubernamentales y del propio mercado (los dueños de las grandes tiendas decidieron no comercializar sus productos ante la caída de sus programas de venta por la falta de electricidad), algunos individuos saquearon y acapararon productos de primera necesidad para revenderlos más caros a sus vecinos aprovechando la escasez. En los latrocinios masivos también fueron robados artículos electrónicos que nada tenían que ver con la sobrevivencia: televisores de alta definición, refrigeradores e incluso vehículos de trabajo (específicamente un grúa). Ahora bien, la actitud de quienes participaron en estos eventos críticos no fue muy diferente de algunos agentes del sector inmobiliario que recorrieron las calles de las ciudades siniestradas ofreciendo dinero para comprar los terrenos de las casas derrumbadas o de los empresarios del retail que vendieron al Estado productos en malas condiciones (por la falta de refrigeración) para su distribución entre los damnificados o que aprovecharon las facilidades de importación dispuestas por el gobierno para introducir productos bajo la etiqueta de “ayuda humanitaria”, que finalmente serían vendidos al propio Estado. Lejos de encajarse en la figura de la expropiación social dada por la idea de “recuperaciones” frente al capital, los saqueos fueron el escenario de operaciones de un importante grupo de “emprendedores salvajes” de pequeña escala que aplicaron con frialdad algunos principios de la racionalidad económica neoliberal de los grandes “emprendedores salvajes”.

Sin embargo, el terremoto dejó en evidencia también las dificultades de actuación de un Estado mínimo idealizado por el neoliberalismo: los organismos de emergencia, asfixiados por los bajos presupuestos, sufrieron serios problemas de comunicación y no alertaron a la ciudadanía del Maremoto que azotó las costas del Sur de Chile, la Presidente de la República ni siquiera pudo contar con un helicóptero para movilizarse a la zona afectada y prácticamente no tenía comunicación con las Fuerzas Armadas, etc. El Estado también rechazó la ayuda ofrecida por los países vecinos tanto porque no sabía informar exactamente qué era lo que se necesitaba, como por la autoconfianza nacional dictada por el ideario del Chile moderno. Aunque un partidario del libre mercado podría argumentar que el Estado falló, porque es intrínsecamente ineficiente, lo cierto es que el mercado también idealizado por estos sectores fue incapaz de lidiar con la catástrofe: la telefonía dejó de funcionar en las zonas afectadas - vale recordar que las compañías de telecomunicaciones fueron privatizadas hace décadas - y el sector inmobiliario rápidamente se lavó las manos frente a cualquier responsabilidad por los edificios colapsados por el movimiento.

Cuando un país sísmico como Chile es incapaz de reaccionar adecuadamente frente a un acontecimiento como éste, independiente de su magnitud, resulta equívoco comprenderlo como una “catástrofe natural”. Un país cuyo Estado es incapaz de comunicarse con todo el país, una institucionalidad de emergencia disminuida a niveles de inoperancia y un mercado inmobiliario que ya burlaba con sistematicidad las normas antisísmicas fueron el caldo de cultivo para la catástrofe “social” post-terremoto. Ahora bien, pese a los titubeos iniciales, el Estado sí mostró un rostro: ante las denuncias de caos en las ciudades afectadas, el gobierno decidió movilizar a las fuerzas armadas para evitar que continuasen perpetrándose los saqueos. Con los militares en la calle para proteger supermercados y para impedir eventuales nuevos atracos se corporificaba la idea de un Estado reducido al mero ejercicio de la fuerza física. La fórmula neoliberal tomaba sus ropajes más salvajes.

Al quedar al desnudo la operatividad más cruda del neoliberalismo, era impensable que su hegemonía permaneciese incólume. Y bien lo expresó Eduardo Santa Cruz: “La emergencia permitió que, al menos transitoriamente, se produjeran fisuras en los simulacros que sostienen el orden hegemónico y se hicieran más evidentes

algunas tendencias de base y de los procesos profundos que han estado transformando la vida social. Así, procesos como la heterogeneización y fragmentación social, la hiperindividualización de la vida social, la transformación de lo público y lo político, la mediatización social, entre otros, se manifestaron con una aspereza y brutalidad tal que provocaron que el escenario que la hegemonía liberal montaba para su discusión también se derrumbara. Porque es muy distinto discutir en un seminario auspiciado por algún organismo público sobre la desarticulación de las redes y el tejido social, que ver sus efectos concretos manifestado en saqueos, guardias blancas, violencia de todos contra todos, en el marco de ciudades destruidas” (SANTA CRUZ, 2010, p. 205–206). El terremoto y posterior maremoto había echado abajo la moderna fachada del modelo chileno, dejando expuestos sus interiores subdesarrollados. Tras la entrega de veinticinco teléfonos satelitales a la Presidente Bachelet de manos de Hillary Clinton poco después de la tragedia, resultaba al menos contra intuitivo seguir creyendo de la misma manera en la idea de Chile como el país modelo de América Latina. De hecho, algunos han llegado a creer que el terremoto telúrico no era sino un vaticinio del terremoto social que se avecinaba con las movilizaciones sociales del 2011.

DEL PARAÍSO DEL CONSUMO AL PARAÍSO DEL ABUSO EMPRESARIAL

En pleno auge de la teoría de la dependencia André Gunder Frank, introducía, citando a Mariano Otero, el concepto de “lumpenburguesía”, definida como “la clase que no era más que el instrumento pasivo [yo diría más bien activo, A.G.F.] de la industria y del comercio extranjero, y sus intereses eran naturalmente los de éste”. Los integrantes de esa clase “están profundamente interesados en mantenernos en el estado [o más bien proceso] de miserable atraso del que saca el comercio extranjero sus ventajas” y que podríamos denominar ‘lumpendesarrollo’” (GUNDER FRANK, 1978, p. 15). Si se considera el carácter rentista de la burguesía chilena en un sistema económico que más que producir riqueza produce super-ricos, es probable que la categoría de “lumpenburguesía” aún sea provechosa para caracterizar a este sector social. Sin embargo, no es por esa razón que he traído a colación ese concepto, sino más bien porque que en el Chile neoliberal la idea de un “lumpen-empresariado”, como un sub-conjunto de la lumpenburguesía, puede caracterizar en buena medida elementos significativos de la cultura del emprendimiento chileno.

En el Chile neoliberal, la figura del “emprendedor” que reemplazó a la antigua burguesía nacional productivista, destruida por la apertura económica que la hizo competir en desventaja en el mercado internacional durante la Dictadura, se convirtió en la corporificación de la virtud social, aquel que a partir de su esfuerzo individual era capaz de conquistar el mundo mediante el aumento de su patrimonio. Uno de ellos, el empresario de origen alemán Horst Paulmann, incluido en la lista de los hombres más ricos del mundo de Forbes, era considerado por el Ministro de Economía del gobierno de Piñera, Pablo Longueira, como una especie de nuevo Bolívar: “Cuando se escriba la historia de cómo se unió América, creo que Horst Paulmann va a ser una persona que va a estar dentro de los registros de aquellos emprendedores que con su talento unieron al continente”. La desmesura de la comparación adquiere nuevos ribetes si se considera que el empresario en cuestión, nacionalizado por gracia en el año 2005 bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos, ha protagonizado una serie de polémicas, entre otras, por haber sido condenado por cobros abusivos a sus clientes al aumentar unilateralmente los costos de mantención de las tarjetas de sus tiendas, mientras oficiaba como Gerente General de su grupo económico el primer

pre-candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la última elección y también ex ministro de minería de Piñera, Lourence Golborne. Paulmann, quien fuera reconocido como el empresario más destacado el año 2005, al verse obligado a devolver dinero por estos cobros, trató de obligar a sus clientes a gastar el monto de la devolución en sus propios supermercados. Otro de sus ex Gerentes, Julio Pereira, nombrado como Director de Impuestos Internos por Sebastián Piñera, debió renunciar a su cargo luego de que se conociera que había realizado gestiones para condonar millonarias deudas tributarias a CENCOSUD, la empresa del empresario alemán. Paulmann, así como todos los empresarios del rubro de supermercado, ha sido acusado de coludirse para definir los precios de algunos productos y de tener prácticas abusivas contra sus proveedores, la mayor parte de ellos micro-empresarios que no reciben pagos inmediatos por la venta de sus productos e incluso deben bajar extraordinariamente sus precios para no ser excluidos del mercado por las grandes cadenas

Uno de los casos de colusión que mayor indignación pública generó fue la combinación de precios que realizaban las tres principales cadenas de farmacias, las que en su conjunto contralan la mayor parte del mercado chileno. Los dueños de las farmacias se ponían de acuerdo para fijar los precios de los medicamentos, generando la falsa ilusión de mercado diverso regido por la competencia. Aunque no fue el único caso de este tipo descubierto en los últimos años, por tratarse de una cuestión tan sensible como la salud de las personas, rápidamente el caso asumió características de escándalo público, sin embargo, pese a que la justicia comprobó la existencia del delito, sólo condenó a los ejecutivos a clases de ética empresarial.

Otro caso paradigmático fue el de la empresa de retail La Polar (2011), la cual venía año tras año acaparando los elogios y las portadas de las revistas empresariales por sus espectaculares desempeños financieros. Sin embargo, sus ejecutivos, otrora estrellas ascendentes de los mercados, debieron sentarse en el banquillo de los acusados, al descubrirse que las espectaculares cifras eran obtenidas mediante la renegociación unilateral y no informada de las deudas de las tarjetas de créditos de sus clientes, la mayor parte proveniente de los quintiles de menores ingresos del país. Aunque la empresa en realidad estaba generando pérdidas, esta práctica permitía crear la ilusión de salud financiera, abultando ficticiamente sus estados, a costa del aumento del endeudamiento (no consentido) de sus clientes. Cuando el 4 de agosto de 2011, uno de los locales más emblemáticos de esta tienda ubicado en pleno centro de Santiago era consumido por las llamas, después de que unos desconocidos le prendieran fuego en el contexto de una protesta social, parecía que lo que se quemaba era la capacidad de la lógica del endeudamiento de pivotar el bienestar material del Chile Neoliberal. Durante los años 1990 y en la primera década del siglo XXI, la tarjeta de crédito fue una especie de productor directo de hegemonía, el pilar fundamental del paraíso del consumidor en el que se convirtió Chile. Sin embargo, la denuncia de estos casos mostraba que más que ser un paraíso para el consumidor, Chile más bien parecía un paraíso para el abuso empresarial.

Al mismo tiempo, y en buena medida gracias a la acción del Poder Judicial, quedaba demostrada la necesidad de intervención y regulación pública para evitar estos abusos, pese a los airados reclamos de la Asociación de Bancos. La ilusión del mercado auto-regulado por la libre interacción entre la oferta y la demanda se mostraba como tal, una mera ilusión y surgía con claridad el resultado concentrador de las fuerzas de mercado. El cuestionamiento de las lógicas de “emprendimiento salvaje” practicado por el empresariado local los mostraba como un “lumpen-empresariado” que además usaba el dinero previsional ahorrado por los trabajadores

chilenos para financiar sus operaciones bursátiles. Efectivamente, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs), el sistema privado de capitalización individual para otorgar pensiones, habían hecho precisamente de estas empresas cuestionadas algunos de sus principales blancos de inversión. El abuso contra los consumidores era financiado por sus propios ahorros previsionales.

Paradójicamente, con la llegada a la primera magistratura de uno de estos super-empresarios, los grandes emprendedores pasaban de héroes a villanos. Es posible que la exposición de los propios comportamientos salvajes en el mundo financiero del presidente haya contribuido para visibilizar aún más los abusos con los que los grandes empresarios construían sus fortunas. El Presidente, otro de los hombres más ricos del planeta, condenado en reiteradas ocasiones por el uso de información privilegiada para realizar sus operaciones especulativas ayudó a convertir a sus pares en el blanco de los cuestionamientos de una ciudadanía cada vez menos dispuesta a soportar los abusos del mercado.

EL “SISTEMA” ESTÁ DESNUDO: LA NOVEDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 2011

El movimiento estudiantil chileno encandiló en 2011 a una parte importante del mundo. Sea por su creatividad a la hora de protestar, por la masividad de sus manifestaciones o por la solidez de sus demandas, los estudiantes chilenos han conmovido un enorme interés del campo académico (AZÓCAR, 2013; LUZIO; GÓMEZ, 2014). Es interesante subrayar que ha habido cierta coincidencia en identificar su irrupción con un nuevo ciclo político y social en Chile (GARCÉS, 2012).

El debilitamiento de la esfera pública coincide, para algunos autores (SENNETT, 2002), con la transformación de los espacios de encuentro con extraños como precondition para la constitución de un espacio público, en lugares de paso, ligados al movimiento y no a la permanencia. La aparición de experiencias como la de los *Occupy* ha permitido reconfigurar espacios más permanentes de encuentro, debate e incluso deliberación: las plazas de los indignados y las calles de los estudiantes chilenos son presentadas como ejemplos de expresividad de una nueva ágora que, gracias al uso de las nuevas tecnologías como una extensión organizativa, combina la co-presencialidad con el alcance virtual de las redes sociales (GOHN; BRINGEL, 2012).

Ahora bien, si se revisa la historia de los movimientos sociales chilenos, veremos que existe una larga trayectoria de ocupación de los espacios públicos como forma de contestación política, manifestación que no se interrumpió ni siquiera con la dictadura militar (SALAZAR, 2013). En ese sentido, paradójicamente la novedad del movimiento estudiantil chileno sería la retomada de una tradición de movilización social que, en el pasado, alcanzó altos niveles de masividad. Lo que el historiador Sergio Grez expresó de la siguiente manera: “El año 2011 quedará inscrito en la historia de Chile como el de un nuevo despertar de los movimientos sociales después de más de dos décadas de aletargamiento debido a la combinación de la acción “natural” del modelo económico neoliberal, del recuerdo del régimen de terror de la dictadura, de las trabas y cortapisas legales e institucionales para la expresión de las demandas sociales, de la virtual dictadura mediática impuesta por un puñado de grupos económicos y de poder, además del control y cooptación de estos movimientos ejercidos durante largo tiempo por los gobiernos de la Concertación y sus partidos” (GREZ, 2011).

Ahora bien, lo que tiene de diferente el movimiento por la educación pública que irrumpió el 2011 es su magnitud. No se registraban marchas tan masivas en Chile

desde el gobierno de Salvador Allende. Es precisamente la masividad de estas movilizaciones lo que permitió dar visibilidad a una serie de dispositivos represivos que, aunque se exacerbaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, no fueron ajenos a las prácticas de los gobiernos anteriores frente a los movimientos sociales. Vale recordar que la Ley de Seguridad del Interior del Estado – creada en dictadura, pero con antecedentes previos – fue aplicada por los diferentes gobiernos de la Concertación contra dirigentes de gremios (transporte), sindicatos (minería) y, sobre todo, contra el Pueblo Mapuche.

Si aplicamos el criterio de permanencia, también observaremos que durante los veinte años de gobiernos de la Concertación, el movimiento estudiantil secundario y universitario se movilizó permanentemente, aunque con altos y bajos, y, a lo largo de su historia, se mostró como un actor relevante en el espacio público chileno. A pesar de que la condición de estudiante es de carácter transitorio, lo que podría otorgar al movimiento una propensión a la discontinuidad, resulta innegable que en las dos últimas décadas viene produciéndose un aprendizaje dentro del propio movimiento estudiantil, con lo que se han acumulado experiencias, se han probado repertorios de acción colectiva y se han consolidado y refinado discursos y demandas.

En particular, desde la fundación de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) en 1906, el Movimiento Estudiantil Universitario cumplió un importante papel en la política chilena, siendo un foco de resistencia a las dictaduras de Carlos Ibáñez (1927-31) y de Augusto Pinochet (1973-1989). De la misma manera, el movimiento contribuyó enormemente a la modernización de las instituciones universitarias principalmente mediante la promoción de la Reforma Universitario de 1967.

Por su parte, aunque el movimiento de estudiantes secundarios no tuvo el mismo protagonismo que el universitario durante la primera mitad del siglo XX, la atención nacional que concentró la campaña para la elección de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES) en 1973 entre la izquierda y la derecha mostró la importancia política que este sector tenía ya durante el gobierno de Allende. Sin embargo, serán los intentos de resistencia a la Reforma Educacional de Pinochet (consolidación del Estado Subsidiario, municipalización de la educación escolar e identificación el proceso educativo con la libertad económica), los que darán relevancia histórica al movimiento, pues, a pesar de haber sido derrotado, las masivas movilizaciones que organizaron en plena dictadura fueron fundamentales para erosionar el régimen autoritario.

Iniciado el proceso de transición democrática a comienzos de los años 1990, las movilizaciones universitarias contra el proceso de mercantilización de la educación pública a finales de esa década parecían romper con el inmovilismo social al cual la sociedad parecía condenada. El historiador Luis Thielemann ha valorado la frescura crítica y la densidad de masas del movimiento estudiantil de los años 1990 en el marco del páramo neoliberal que buscó anular cualquier tipo de conflictividad en aquel entonces. En sus palabras, la generación de años 1990 “fue un intento madrugador y exitoso, y por tanto fundacional en la cultura de los sectores organizados del Movimiento Estudiantil, por construir un movimiento democrático y, para los pacificados noventas, muy radical, todo en la misma combinación orgánica, y que superase la vocación por realizar la profecía del fin de la historia en una sociedad neoliberal” (THIELEMANN, 2014, p. 248). Sin embargo, ninguna de esas movilizaciones llegó a las cifras de participación del movimiento del 2011, aunque contribuyeron a forjar una crítica articulada al sistema educacional chileno y transformaron a los estudiantes en actores sociales claves de la democracia chilena.

Con todo, será el inicio de un ciclo de movilizaciones animado por los es-

tudiantes secundarios lo que marcará una nueva etapa en el movimiento estudiantil chileno que sirve como antecedentes para las explosiones del 2011. Diez años antes, se produce en el “mochilazo”, que marcó la primera gran irrupción de estudiantes secundarios en la esfera pública en la post-dictadura, ya que las movilizaciones lideradas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) tomaron la agenda social en ese momento en reivindicación del Pase Escolar y en defensa de la educación pública. En el año de 2006, nuevamente las movilizaciones secundarias alcanzaron notoriedad nacional, esta vez con la “Revolución Pingüina” (en referencia al uniforme que usan los estudiantes).

La “Revolución Pingüina” generó una profunda crisis política en el recién instalado gobierno de Bachelet, cuestionando la última ley decretada por Pinochet antes de abandonar el poder: la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), en la cual se consagraba el papel subsidiario del Estado en materia educacional, dejando la regulación de la educación en las manos del mercado. Para Mario Garcés, el mérito del movimiento fue traer a la palestra el problema de la calidad de la educación chilena, pero como un producto de la enorme desigualdad existente en el país. Al mismo tiempo afirmando que: “la novedad del movimiento secundario es que instaló la necesidad del cambio no desde el cálculo político, sino desde la experiencia que significa formarse en una mala escuela o en un liceo precarizado, que no proyecta a los estudiantes del pueblo hacia adelante, sino que los condena a futuros trabajadores informales o a ocupar roles subordinados en el sistema económico dominante. La escuela neoliberal pobre no representa más que un espacio de sociabilidad para los jóvenes, un trabajo proletarizado para los profesores, un negocio para los “sostenedores” y una carga difícil de sobrellevar para los municipios” (GARCÉS, 2006, p. 48).

Muchos de los estudiantes que se movilaron el 2011 participaron de alguna manera en la “Revolución Pingüina”, sea en las calles, sea en las tomas de los establecimientos educacionales, sea en las “paralizaciones reflexivas” que los secundarios hacían para articular un discurso crítico. En aquella ocasión, algunos analistas ya llamaban la atención para el empleo de nuevas tecnologías como herramientas de apoyo de sus movilizaciones en el movimiento: “Asimismo, constituyen un nuevo referente en cuanto a flujos comunicativos posmodernos, ya que se apoyan en recursos tecnológicos propios de nuevas generaciones: el uso de blogs, celulares y mensajes de texto mediante los cuales logran articular acciones a escala regional y nacional, construyendo un discurso instantáneo y poderoso que sobrepasa las dinámicas político-comunicacionales a las que estamos acostumbrados” (ORTEGA, 2006, p. 22).

En este sentido, se debe distinguir entre la novedad del uso de herramientas comunicacionales digitales como facilitadores de la movilización de los estudiantes, de la definición del propio movimiento a partir de ese trazo. Más que una nueva forma de acción colectiva, los estudiantes enriquecieron su repertorio de acción, incorporando las nuevas tecnologías a sus clásicas formas de movilización: paros, tomas, marchas y asambleas. El uso de un determinado repertorio indudablemente puede ser fundamental para la creación de una identidad colectiva, pero sería un error entregar, en este caso, ese papel a las formas de comunicación que los estudiantes utilizaron, por más innovador que esto sea.

Ahora bien, si existió una marca en la “Revolución Pingüina”s ésta fue la toma generalizada de las escuelas del país, una vez que los intentos de criminalización del movimiento por parte del gobierno y de los medios de comunicación parecían cuestionar la legitimidad de los estudiantes. Previo a las sucesivas tomas de colegios, los secundarios habían privilegiado la movilización en las calles con consecuencias bastante violentas por los enfrentamientos producidos con la policía y por los desmanes

realizados por algunos estudiantes. La flexibilidad mostrada por los secundarios en ese momento permitió que recuperasen el apoyo de la ciudadanía, una vez que la estrategia de criminalización dejaba de surtir efecto.

Los estudiantes movilizados el 2011 cargaban en sus mochilas la experiencia de la “Revolución Pingüina”, no sólo por la transferencia de capital organizativo de aquel movimiento, como también por el aprendizaje que significó la derrota de los secundarios. El desenlace del movimiento estuvo lejos de satisfacer las demandas de los estudiantes: fin al lucro en la educación, fin a la municipalización de las escuelas y fortalecimiento del papel del Estado en materia educativa. La salida escogida por el gobierno de Bachelet de ese entonces fue la creación de una mesa de diálogo, en la cual estuvieron representados los estudiantes, pero que mantuvo un perfil mayoritariamente “técnico”. La propuesta final de esa comisión desconsideró buena parte de la demanda de los estudiantes y, aunque la LOCE fue sustituida, la estructura del sistema educativo se mantuvo intacta, en otras palabras, el sistema político proceso la demanda estudiantil reafirmando el consenso con apelación científico-técnica de que el Estado debe mantener un carácter subsidiario.

El movimiento estudiantil post-2011 recoge las demandas y las críticas de esa experiencia. En ese sentido, más importante que preguntar por la novedad del movimiento es interrogarse por la trascendencia que el movimiento de 2011 tuvo para el país. Álvaro Ramis (RAMIS, 2011) es uno de los analistas que destaca al Movimiento Estudiantil chileno como el más importante de América Latina, no porque los estudiantes tengan más conciencia que sus congéneres latinoamericanos o porque sean más activos, sino porque en ningún otro país del continente se experimentó un proceso tan dramático de descomposición y mercantilización de su sistema educacional (en Chile, sólo el 25% del sistema es financiado por el Estado, el restante viene de los bolsillos de las familias de los estudiantes). Al cuestionar el sistema de educación, los estudiantes chilenos tematizaron el propio modelo de desarrollo del país, pues evidenciaron la enorme desigualdad de la sociedad chilena. La organización de un sistema educacional basado en el rol subsidiario del Estado y en la preeminencia de lo privado habría terminado por potenciar formas de segregación educacional que limitarían el potencial de movilidad social prometido por la educación (VILLALOBOS; QUARESMA, 2015). En las palabras de Giorgio Jackson, uno de los dirigentes más destacados del 2011 y actualmente diputado de la República: “Desde hace más de cinco meses, todas las reivindicaciones sectoriales del movimiento estudiantil se han ido articulando a través de un eje central: la desigualdad que impera en Chile. La desigualdad entendida como una perpetuación de ésta, ha sido el foco que nos permitió hacer emerger el descontento que ha estado latente en amplios sectores de la sociedad y que no se expresaba en forma abierta, debido a un autocomplaciente discurso de las autoridades de gobierno” (JACKSON, 2011).

La crítica estudiantil rápidamente pasó de lo estrictamente educacional para una crítica global del modelo chileno y su consenso neoliberal. Al exigir calidad en la educación y un papel garante del Estado, desvendaron la desigualdad social del país, propusieron también una reforma estructural del sistema tributario para financiar la educación pública, así como la modificación de la política nacional en relación a las riquezas naturales (renacionalización del cobre) y, al mismo tiempo, colocaron en jaque la institucionalidad política heredada de la dictadura, la que venía mostrándose impermeable a las demandas ciudadanas. Tal como destacó el sociólogo Jaime Massardo: “La nueva generación que protagoniza el movimiento no vivió el miedo a la dictadura y a través de su creatividad, su alegría, su disposición a la horizontalidad y su transparencia representa una nueva forma de *praxis* en un contexto que, sin la camisa

de fuerza y el empantanamiento político propia de los gobiernos de los partidos de la post-dictadura, ha dado forma a *una nueva subjetividad* que viene creando un proceso que pone en el tapete la necesidad de un nuevo Chile, de una *Segunda República* donde todos podamos vivir en mejores condiciones, forjando un futuro construido también por todos. El rey está desnudo: la lucha del movimiento estudiantil ha construido una nueva mirada sobre Chile, mostrando que es un país inmensamente rico cuya riqueza es distribuida con extrema desigualdad” (MASSARDO, 2011).

Sin embargo, como ya se afirmó, la crítica global y radical esgrimida por los estudiantes el 2011 no estuvo ausente en otros momentos, lo que es substantivamente diferente es que, en ese año, la mayoría de la ciudadanía compartía los cuestionamientos de los estudiantes al estado de cosas en Chile. Específicamente en relación a las demandas del movimiento, diferentes encuestas de opinión mostraban un promedio de apoyo al movimiento cercano al 80%, siendo que paralelamente el gobierno de Sebastián Piñera veía desplomarse su popularidad, alcanzando los niveles más bajos registrados desde el retorno a la democracia (entre 22% y un 30%).

La salida de la Concertación del gobierno contribuyó a que sus bases en el movimiento por la educación pública se incorporasen a los esfuerzos movilizadores y dejasen de ser un factor de contención e inmovilismo al interior de las organizaciones. De hecho, un elemento diferente de otros ciclos de movilización es que el movimiento del 2011 contó con un grado de unidad y simultaneidad de acción de los diferentes actores implicados en la educación como nunca antes fue posible: el Colegio de Profesores, las organizaciones secundarias, las federaciones universitarias y los centros de padres.

La propia llegada a La Moneda de Sebastián Piñera creó un escenario favorable para que las demandas estudiantiles fuesen bien recibidas por la sociedad. Tal como explicaba Giorgio Jackson (2011): “Durante la Concertación era fácil que los gobernantes y autoridades culparan al sistema político, a la obstrucción opositora de derecha que no daba los votos para las reformas y usaba ese argumento para descomprimir la presión social, al tiempo que ocultaba su falta de convicción y coraje para impulsar cambios fuera del marco de “la política de los consensos”. Hoy, el gobierno no tiene a quién culpar, porque además concentra todo el poder. Eso permite que la presión social se concentre en un mismo punto: en la desigualdad del sistema. Eso hace que el movimiento sea más ambicioso, menos sectorial y más político, desde el punto de vista de que las demandas se hacen transversales”.

Cabe recordar que la transición democrática chilena redujo a estrechos márgenes la expresión de demandas ciudadanas y de disensos sociales. El paso de la dictadura para la democracia fue mediado por la tutela del ejército en su concreción con el consecuente privilegio de la estabilidad por sobre la manifestación libre de las aspiraciones ciudadanas que habían derrotado a la dictadura en el plebiscito de 1988. La Concertación, consciente de la fragilidad que sustentaba a la democracia, se resguardó exitosamente en el temor al retorno a un pasado autoritario para no ampliar los límites de lo posible.

Una vez que la Concertación es derrotada y la derecha entra, sin bombardeos mediante, a La Moneda, paradójicamente la desmovilización deja de ser un acto de autocensura por parte de los sectores sociales, perdiendo su eficacia discursiva. En este escenario, la derecha se mostró incapaz de generar dispositivos de convencimiento para evitar que el descontento en áreas sensibles (Educación, Medio Ambiente, Derechos Civiles) se tome las calles del país. Como consecuencia, viene produciéndose un recrudecimiento de las prácticas represivas ordenadas por el ejecutivo: infiltración policial en las protestas para producir desórdenes, detenciones ile-

gales de manifestantes, ejercicio de una violencia desmedida, torturas, restricción del derecho de reunión y de libre tránsito en las calles, etc. Acontecimientos que fueron denunciados por organizaciones de DDHH a diferentes organismos internacionales como UNESCO, por el agravante de haber sido cometidas, en algunos casos, contra menores de edad.

El mérito de las movilizaciones estudiantiles del 2011 fue haber realizado una certera crítica al corazón mercantil de la educación y con ella al consenso neoliberal que sostenía la sacralidad del modelo, es decir, los estudiantes mostraron que, parafraseando a Darcy Ribeiro (2011), la crisis en la educación era el resultado de un programa. Lo que, sumado a un gobierno que, incapaz de reparar ese consenso herido, debió escudarse en los dispositivos represivos del Estado. De esta manera, el movimiento estudiantil apuntaba al modelo y profanamente afirmaba que “el rey está desnudo”.

Para conseguirlo, el movimiento estudiantil debió dar un salto en su propio discurso. Durante la mayor parte de los años 1990 y la primera década del siglo XXI, en un movimiento social poco dado a consensos, primó casi sin contrapeso la bandera del arancel diferenciado, estableciendo niveles de gratuidad dependiendo del ingreso económico de las familias, como demanda articuladora del movimiento universitario. No sólo sus principales impulsores, las Juventudes Comunistas, contribuyeron a ello, también lo hicieron aquellos sectores de la izquierda que, cada tanto, le disputaban la hegemonía del movimiento estudiantil. Las movilizaciones del 2011 resolvieron ese debate a favor de la educación gratuita, siendo incorporada de manera casi unánime por el movimiento estudiantil e, incluso más allá, ganando la simpatía de la propia ciudadanía. Las masivas movilizaciones ampliaron el horizonte de posibilidad del movimiento permitiendo el tránsito de una gramática de derechos parciales (Arancel Diferenciado) para una gramática de derechos universales (Educación Gratuita).

El movimiento estudiantil pre-2011 sostenía la bandera del Arancel Diferenciado con apoyo de las teorías de la reproducción de la educación, es decir aquellas perspectivas que consideran que el sistema educacional reproduce las desigualdades sociales (BOURDIEU; PASSERON, 2001). En contraste, con el arancel diferenciado, se generaría, en la práctica, una forma de redistribución de la riqueza, pues, al pagar, los sectores favorecidos contribuirían al financiamiento del sistema y, por ende, al subsidio de la educación de quienes no pueden hacerlo.

No obstante, la mantención de esta bandera generaba una serie de contradicciones dentro del movimiento, pues optar por el Arancel Diferenciado implicaba reconocer que es justo que algunas personas paguen por estudiar en instituciones públicas. Se niega, por lo tanto, la idea de la educación como un derecho universal al cual cualquier ciudadano puede acceder independiente de su condición social. La lógica del arancel diferenciado no rompía totalmente con los principios del Estado subsidiario en educación, pues con él la educación no se mide por su “valor de uso” en tanto derecho, sino como “valor de cambio”, o sea como “bien de consumo” - según la conocida expresión de Sebastián Piñera - intercambiable por otros en el mercado. Al mismo tiempo, al dejar una parcela del financiamiento de las Universidades Públicas dependiente del pago de sus estudiantes, se reproduciría la noción de “autofinanciamiento” de las universidades actualmente en vigencia y, con ella, se mantendría el desentendimiento que actualmente el Estado practica en relación al financiamiento de sus universidades y que lleva a las mismas a cobrar aranceles que no se diferencian de las privadas.

La educación en tanto derecho no puede ser medida por criterios de mercado, no puede tener precio, y ese es el principio a partir del cual actuaron los estudiantes. Al reivindicar una gramática de los derechos, los estudiantes fueron capaces

de mostrar una enorme fisura en el consenso neoliberal. La educación tradicionalmente ha sido vista como uno de los principales mecanismos de movilidad social. La crítica de los estudiantes mostraba que más que promover formas de ascenso social, la educación se había convertido en un negocio rentable que, además, reproducía y amplificaba la desigualdad social imperante en el país. ¿Por qué el gobierno de Sebastián Piñera no fue capaz de satisfacer la demanda de los estudiantes? Sin duda, en la negativa a negociar con los estudiantes y en la disposición gubernamental a inmolar políticamente a sus ministros de educación (tres ministros salieron de sus puestos gracias a la presión estudiantil) hay un claro dejo de intransigencia ideológica. No se podría introducir una lógica de derechos universales, comenzando por la educación, sin tematizar las formas de financiamiento propuestas por los estudiantes: reforma al regresivo sistema tributario y nacionalización de los recursos naturales podría significar un abandono obligado de las lógicas neoliberales en un momento de amenaza. El gobierno, prácticamente condenando su continuidad en la elección presidencial, decidió optar por lógicas más bien coactivas, al reconocer la imposibilidad de un acuerdo entre dos concepciones antagónicas de la educación.

LAS LÓGICAS REPRESIVAS EN EL CHILE NEOLIBERAL

Aunque la violencia estatal desmedida puede llegar a ser efectiva para combatir una demanda social en condiciones autoritarias, en contextos democráticos, suele tener el efecto contrario, amplificando el descontento, con altos costos para un gobierno, más aún cuando la reivindicación social es percibida como justa por la mayor parte de la sociedad. El movimiento estudiantil, gracias a la masividad de sus manifestaciones y a las simpatías que generó en la ciudadanía, permitió visibilizar una serie de dispositivos represivos que sistemáticamente se aplicaban para neutralizar toda forma de disenso social. En ese sentido, es bastante probable que los estudiantes hayan contribuido a sellar la derrota electoral del proyecto de continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. Ahora bien, con la opción represiva de las autoridades gubernamentales, más que proteger al modelo, parecieron convertirse involuntariamente en los agoreros del fin de su hegemonía.

De todos los sectores sociales que sufrieron la represión estatal durante la post-dictadura, ninguno de ellos lo vivió con tanta intensidad como el pueblo mapuche, cuyo movimiento de autodeterminación y recuperación de tierras desde los años 1990 ha venido cuestionando las lógicas de la transición (PAIRICÁN, 2014). Si bien la política de criminalización de la causa mapuche era anterior al gobierno de Sebastián Piñera, ya que la aplicación de la Ley Antiterrorista, una de las principales herencias jurídicas de la Dictadura, se arrastra desde los gobiernos progresistas de la Concertación, la relación del Estado con el terrorismo alcanzó otro rango durante este último gobierno, formando parte de una estrategia más amplia de criminalización de los movimientos sociales y de consolidación de formas represivas de acción policial frente al descontento y frente al disenso político-social. Ya en los debates presidenciales que antecedieron a su gobierno, Sebastián Piñera dejaba clara su posición frente a la cuestión Mapuche: “En la Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el gobierno en vez de aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista gorda y cuando el gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede seguir actuando con impunidad ... [que] un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque [el gobierno] no está cumpliendo con su deber” (The Clinic, 13/09/2010). Una vez asumido en el puesto y enfrentado a una huelga de hambre de presos políti-

cos mapuches que reivindicaban el fin de la Ley Antiterrorista que se aplicaba sobre ellos, el presidente Piñera se encargaba de señalar que los comuneros habían optado por un camino equivocado, el de la violencia, y, en una infeliz comparación, trazaba un paralelo entre los mineros atrapados en una mina y los comuneros, como muestras contrastantes de la lucha por la vida y el desdén por la misma, eligiendo nada menos que la Asamblea General de la ONU como escenario de tal afirmación.

Lo cierto es que durante el gobierno de Piñera se activaron diferentes dispositivos represivos con una intensidad inusitada, configurando una lógica de actuación que encuentra en el tratamiento del pueblo mapuche su referencia paradigmática. Tal como lo revelaron diversos cables filtrados por Wikileaks, fue la propia embajada estadounidense en Chile la que el año 2009 calificó en los siguientes términos el conflicto Mapuche: “Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles... La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas”.

La descripción de los diplomáticos estadounidenses parece bastante realista y de ella se desprende la existencia de una construcción artificial de una “Araucanía en llamas” – la expresión es del propio Sebastián Piñera. Sin embargo, peca de ingenuidad al mostrar la “exageración” de las autoridades nacionales simplemente como meras fantasías y delirios antiterroristas sin mucha razón de ser. Algunas preguntas sugieren que hay mucho más en juego. ¿Qué hay detrás de los intentos de identificar la lucha por la tierra del pueblo mapuche con el terrorismo? ¿Cuáles son las implicaciones de la ampliación de esta lógica a otras esferas sociales? ¿Cuáles son las alarmas que se deben activar frente a la construcción de casos tipificados como terroristas?

En este punto vale la pena recordar el momento cuando circuló el rumor, en momentos que se instalaba el gobierno de derecha, de que existía un documento de la Fiscalía Nacional de Colombia que establecía vínculos entre las FARC, el PC chileno y las organizaciones mapuches. La utilización del espectro de las FARC como arma de guerra sucia para atacar a adversarios políticos ya ha sido usada antes no sólo en Chile sino que en todo el continente como forma de descalificación y criminalización política. Sin embargo, lo que parecía más preocupante en esa ocasión era la operación política que buscaba dar continuidad a las políticas de criminalización de los movimientos sociales, mediante la construcción y el uso de la categoría de terrorista como dispositivo que permite al Estado dar legitimidad a la aplicación de castigos que a todas luces violan los principios básicos del Estado de derecho.

Un hecho que mostró este dispositivo en ejercicio fue el caso del joven paquistaní Mohammad Saif Ur Rehman en el año 2010, a quien se le acusó de tener en su cuerpo residuos de material explosivo. Frente a este acontecimiento, el Ministro del Interior de ese entonces, Rodrigo Hinzpeter se apresuró a afirmar que: “El manipular explosivos es una actividad prohibida y si esa persona efectivamente tenía restos de TNT en su ropa, en este caso quiere decir que los había manipulado y eso constituye un indicio muy poderoso de que estaba participando o participó en la comisión de un delito de terrorismo”. Aunque el fiscal que estaba a cargo de la investigación, no fue capaz de reunir pruebas suficientes para sostener la acusación, el Ministro del Interior ya entregaba su veredicto: terrorismo. Al legitimar políticamente la acusación pre-judicial de terrorismo, el ministro del interior le entregaba a la fiscalía el respaldo necesario para aplicar la Ley Antiterrorista y con ella le permitía hacer uso de las excepciones que esta ley otorga. Por lo demás, esta fallida acusación devela un

intento por equiparar la gramática de la lucha contra el terrorismo pregonada por EEUU con la gramática local, toda vez que el acusado es una persona de origen árabe y lo que se pretendía proteger era la embajada de EEUU.

Quizá lo que mejor refleja esta lógica de construcción de “terroristas” fue el denominado “caso bombas”. En él, una decena de jóvenes anarquistas fueron acusados de poner una serie de explosivos (la mayoría de ruido) en diferentes puntos de Santiago. La aplicación de la Ley Antiterrorista a estos jóvenes facilitó la presentación de una serie de pruebas por parte del fiscal, las que fueron estrepitosamente desechadas, siendo calificadas como “argumentos de cuarta categoría” por el juez de la causa, quien terminó por absolver a cada uno de los imputados. Las acusaciones de coordinación entre el Ministro del Interior y el fiscal para realizar este montaje tomaron fuerza, aún más cuando este último posteriormente fue contratado por el Ministerio, una vez que terminó su periodo como tal. Durante todo el proceso el ministro actuó como si el veredicto estuviese decretado, en todo momento se refirió a ellos como terroristas.

Frente a este último punto, las declaraciones del diputado conservador Cristián Mockeberg parecieron desnudar dramáticamente la lógica implícita en todo el proceso: “Da igual si las pruebas son falsas, lo importante es que se acabaron las bombas”. Más allá de las implicaciones éticas que una frase como ésta apareja, lo que interesa es destacar que el terrorismo aquí aparece como una profecía auto cumplida al estilo Merton (1970). Es decir, una situación con premisas falsas, que provoca conductas en función de esa definición, lo que por su vez, convierte en verdadero el concepto originalmente falso. La existencia de un terrorismo (falso) provoca la aplicación de leyes y acciones para combatirlo, luego se neutraliza y anula el terrorismo (que nunca existió). Así, si el gobierno y los medios de comunicación definen la situación de terrorismo como real, éste se vuelve real en sus consecuencias.

La aplicación de esta lógica no es un descubrimiento del Ministerio del Interior chileno. De hecho, es una dinámica bastante antigua que en Chile se aplicó intensamente durante la Dictadura, pero que ha encontrado una expansión sin parangón gracias a la gramática de la lucha contra el terrorismo de los EEUU. Con ella se ha legitimado el uso de paréntesis éticos-jurídicos para combatir el propio terrorismo. En sus estudios sobre biopolítica, Giorgio Agamben (1998) se concentra en la existencia de estados de excepción que revelan la capacidad de la soberanía estatal para suspender la validez de la ley a través del propio poder legal, creando y garantizando la situación que la ley necesita para su propia validez. En el estado de excepción, el soberano suspende las reglas y aplica la excepción como forma de exclusión de la norma general. El asesinato y desaparición de Osama Bin Laden tal vez sea el mejor ejemplo de esta dinámica que está por sobre cualquier tipo de tratado internacional o de normas básicas de respeto de los derechos humanos. Ahora bien, la Ley Antiterrorista chilena comparte el mismo espíritu de excepcionalidad. Cuando el ciudadano paquistaní exigió disculpas de las autoridades chilenas por haberlo acusado injustamente de ser un terrorista, Rodrigo Hinzpeter respondió “este es un país serio que da garantías de debido proceso. Es importante saber que en Chile no hay nadie que esté al margen de la ley”. Si hubiese querido ser más sincero debería haber agregado que “en Chile nadie está al margen de la ley, salvo el propio Estado”.

Esta doctrina de seguridad interna basada en la lucha contra el terrorismo busca, en último término, precarizar las posibilidades de la ciudadanía de hacer uso del marco de protección que la propia democracia ofrece para ejercer el disenso social. Por eso, no se puede separar esta lógica, emanada desde el Ministerio de Interior, de la agudización de las formas represivas en las movilizaciones sociales realizadas duran-

te el pasado gobierno en contra de Hidroaysén o en defensa de la Educación Pública. Las imágenes de policías disparando sus bombas lacrimógenas horizontalmente hacia el cuerpo de los manifestantes, así como la de policías apaleando personas en ellas, a muchos les ha recordado la Dictadura, por la intensidad de la violencia aplicada en la contención de la movilización social. Sin embargo, hasta hace poco estas dinámicas represivas se circunscribían al territorio mapuche o a movilizaciones más pequeñas, pero en ese momento se hicieron extensivas al resto de la población. No obstante lo anterior, la intensificación de la violencia policial ha encontrado escollos; el abuso que se ha visto en el uso de lacrimógenas ha despertado un debate antiguo, aunque poco visible, sobre las consecuencias sanitarias de sus componentes (carácter abortivo y altamente nocivo en niños y ancianos); asimismo, el Poder Judicial ha puesto en tela de juicio la legalidad de la detenciones de los manifestantes. La ampliación de las lógicas represivas a otros sectores sociales está permitiendo visibilizar un abuso que anteriormente se acotaba a sectores subalternos como los mapuches, lo que, debido a la postergación sistemática que este pueblo ha sufrido, le daba poca repercusión social y comunicacional al empleo desmedido del uso de la fuerza a la hora de reprimir.

Tanto este desnudamiento de las lógicas represivas gracias a la masificación de la movilización, como a las propias medidas de presión extremas realizadas por los mapuches como las huelgas de hambre han permitido un creciente cuestionamiento por parte de la ciudadanía de estos métodos de coerción estatal. De hecho, ha sido necesario que los presos políticos mapuches cada cierto tiempo arriesguen su vida en huelgas de hambre para que los ciudadanos chilenos se enteraran de que en la Araucanía se vive un proceso de militarización (en el que incluso los niños son blanco de represión), que a los mapuches se les aplica una ley Antiterrorista por delitos que si un chileno los cometiera obtendría penas mucho más reducidas, que han existido montajes y que en los juicios contra ellos se permite la declaración de testigos “sin rostro” (lo que no permite una adecuada defensa) y que además existe un doble procesamiento tanto en la justicia militar como en la civil (TRICOT, 2013).

Un Estado democrático que se ve impelido a reproducir dispositivos de coerción como los aquí señalados para combatir el disenso social más que mostrar su omnipotencia deja en evidencia su incapacidad para generar los consensos sociales necesarios para la sobrevivencia sin sobresaltos de un determinado régimen. Desde otra perspectiva, tal como señala Niklas Luhmann (2005), poder no es sinónimo de coerción. El poder influye en la selección de determinadas acciones y aumenta la probabilidad de realización de combinaciones improbables de selecciones, por lo tanto, aumenta en proporción con las alternativas que produce; mientras que la coerción reduce a cero las opciones posibles de quien es obligado. El uso de la violencia física aparece allí donde el poder deja de ser eficiente. Es más, en un contexto de cuestionamiento generalizado a los términos en los que se desarrolló la transición democrática y en los que se va consolidando la necesidad de generar canales nuevos de contestación, la respuesta represiva estatal actúa no como un inhibidor del malestar sino más bien como uno de sus combustibles más eficientes.

40 AÑOS DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO: MÁS ALLÁ DE LOS SILENCIOS

“De la tortura no se habla”, así tituló Patricia Verdugo (2004) el libro en el que diferentes autores ligados al estudio y a la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) discutían el fenómeno de la tortura aplicada en Chile de manera sistemática por los aparatos represivos de la Dictadura Militar a partir del caso del

académico de Ciencia Política Felipe Agüero (University of Miami) quien reconoció y denunció como su torturador a su colega el profesor Emilio Meneses (PUC-Chile). En este texto colectivo, todos los autores coincidieron en que en torno al tema de la tortura existía una especie de tabú que impedía que se hablara de ella en el ámbito público hasta la denuncia realizada por Agüero. Efectivamente, sobre la tortura pesa un silencio múltiple: el de los victimarios, el de las víctimas, el del Estado y el de la sociedad.

Que los victimarios no quieran hablar resulta hasta cierto punto comprensible en la medida que implicaría reconocer su responsabilidad penal en esos crímenes. En el caso del Estado, a pesar de que el Informe sobre Prisión Política y Tortura permitió que éste reconociera la existencia de esa práctica desde sus propios aparatos, algo que antes simplemente había sido negado, la publicación del Informe Valech también inauguró nuevos silencios y olvidos. Tal como señaló Hillary Hiner (HINER, 2009, p. 55) sobre la producción de los informes de Verdad y Reconciliación y el ya citado sobre tortura: “Este proceso desenmascaró irrevocablemente la tendencia de la Concertación a conseguir justicia y verdad sólo en la medida de lo posible, por su timidez frente la confrontación directa con las fuerzas armadas (FFAA) (no dan nombres), y apego incondicional a la narrativa redentora y reconciliación de la historia contemporánea de Chile. El Informe Valech ha enfrentado críticas similares por no nombrar a los culpables, cerrar los archivos de la [Comisión de Prisión Política y Tortura] CPT para los próximos cincuenta años, y presentar una narrativa de borrón y cuenta nueva. El discurso concertacionista es, entonces, una síntesis selectiva de dispositivos producidos por los movimientos sociales durante los años setenta y ochenta, que fue reinterpretada según los parámetros políticos de los años noventa y principalmente del siglo XXI”.

Ahora bien, en el caso de las víctimas, la experiencia límite de pasar por torturas y sobrevivir a ellas representa una situación tan extrema de deshumanización que deja a los torturados sin palabras para comunicar lo vivido. La tortura como dispositivo de dolor y castigo destinado a que la víctima traicione sus convicciones entregando información sobre otros o recociendo su propia culpabilidad busca arrebatar la condición de humanidad de sus víctimas, destruirlas física y psíquicamente. Tal como ha señalado la antropóloga Veena Das (1999), la violencia extraordinaria presente en la tortura es “indecible” en la medida que levanta dudas sobre la propia vida, pues existen violaciones del cuerpo que no pueden ser verbalizadas, no pueden ser dichas, porque pertenecen (y en cierta medida hacen pertenecer a su víctima) al mundo de las cosas, de la animalidad, de lo no humano; lo que dificulta que el tiempo realice su trabajo de reinscripción, reescritura o revisión de esas memorias de la violencia.

Aunque las víctimas de la tortura sean capaces de agarrarse firmemente a un ideal, a una creencia o al amor a su familia para reconstruir sus vidas o incluso siendo, la mayoría de las veces, algunos de los principales activistas en la denuncia de sus torturas, es muy difícil verlos hablar de las violaciones de las que vivieron. Existen casos en el que hasta su círculo más íntimo desconoce el detalle de las vejaciones de las que fueron víctimas, sea para proteger a su familia, sea por la vergüenza que sienten o sea para no revivir la experiencia, hay una parte de su relato condenada al silencio.

Es por esas razones que el testimonio que Feliciano Cerda dio el 28 de agosto de 2013 en el programa de Red Televisión, Mentiras Verdaderas, sobre las torturas que sufrió en su paso por el centro de detención y exterminio Tejas Verdes representa un hito inestimable para la construcción de una memoria de las víctimas de la tortura. En ese programa, Cerda entregó detalles desgarradores de las vejaciones que sufrió y que su propia familia desconocía, lo que a su

vez permitió que otras víctimas se presentasen en ese programa o en otros para hablar de la tortura. ¿Qué hizo posible tal testimonio y por qué se realiza en ese momento y no en otro?

Sin duda, así como en todo sobreviviente a ese tipo de castigo, en Cerda hay algo de extraordinario, algo que queda más patente al observar el modo en que enfrentó a las cámaras y a sus seres queridos para detallar sus torturas (TODOROV, 1995). Cerda asumió su testimonio como un acto terapéutico y liberador, como su íntima forma de decir “nunca más”. Sin embargo, lo que hizo posible que este hombre tuviese el inmenso coraje de dar ese paso tiene que ver también con los procesos que la propia sociedad estaba experimentando.

Durante las últimas décadas pareció que la sociedad no estaba dispuesta a escuchar los horrores que el propio Estado practicó. Aunque sin duda las altas dosis de impunidad que han rodeado los casos de violaciones a los DDHH, han contribuido a este silenciamiento; la propia sociedad pareciera haber vedado tácitamente ciertos temas incómodos. Hoy más de cuarenta años después del Golpe de Estado, Chile parece dispuesto a enfrentar esa historia oculta, removiendo los dispositivos de autocensura que impedían tratar esos temas. Si bien los testimonios, los libros, los documentales y las imágenes de la dictadura siempre estuvieron ahí (no estaban prohibidos), ahora los chilenos parecen dispuestos a encararlos. El testimonio de Cerda llevó al mundo de las palabras la parte más escondida de la historia chilena, porque hoy parte significativa del país quiere escucharlo. Según Nelly Richard (2000, p. 13): “De todo el repertorio simbólico de la historia chilena de estos años, la figura de la memoria ha sido la más fuertemente dramatizada por la tensión irresuelta entre recuerdo y olvido – entre latencia y muerte, revelación y restitución – ya que el tema de la violación a los derechos humanos ha puesto en filigrana de toda la narración chilena del cuerpo nacional la imagen de sus restos sin hallar, sin sepultar. La falta de sepultura es la imagen – sin recubrir – del duelo histórico que no termina de asimilar el sentido de la pérdida y que mantiene ese sentido en una versión inacabada, transicional. Pero es también la condición metafórica de una temporalidad no sellada: inconclusa, abierta entonces a ser reexplorada en muchas nuevas direcciones por una memoria nuestra cada vez más activa y desconforme”.

Cuando el legado institucional, político y económico de la Dictadura comienza a ser cuestionado con mayor amplitud por diversos sectores de la sociedad, el testimonio de Feliciano Cerda nos recuerda el origen espurio de esa herencia. Lo que ocurrió con su cuerpo puede ser interpretado con la más cruel metáfora de lo que ocurrió con nuestro país. Pero, Cerda comprendió que enfrentar la verdad libera. ¿En qué medida este acto personal de redención podría servir como ejemplo para que nuestra sociedad, al encarar sus verdades más sórdidas, dé un paso rumbo a su propia liberación?

La coincidencia de la conmemoración de los cuarenta años del golpe con lo que se ha comprendido como “el despertar” de la sociedad chilena tras su largo letargo transicional (GARCÉS, 2012), ha permitido que estos testimonios sean posibles. ¿No es acaso esto también una señal del fin del consenso que guió esa transición post dictatorial? Para Tomás Moulian (2002), el consenso representaba la forma superior del olvido, para que la racionalidad neoliberal fuese aceptada era necesaria una compulsión al olvido, un bloqueo de la memoria que permitiese la referencia única a un futuro en el que el pasado no tenía cabida: “El blanqueo fue y es la gran empresa de esas razones de Estado. Se trata de un diversificado conjunto de operaciones cuyo objetivo ha sido imponer la convicción y el sentimiento de que para Chile la convivencia de pasado y futuro son incompatibles. Que es necesario renunciar al pasado

por el futuro, a menos que se desee caer en la lógica angustiosa de la repetición” (MOULIAN, 2002, p. 42). Un Chile que deja de olvidar y comienza a enfrentar sus fantasmas es también un Chile que comienza a cuestionar su presente y a comprender que los principales crímenes cometidos por la Dictadura no sólo fueron las formas crudas de represión (la tortura y la desaparición), sino la eliminación de una serie de derechos conquistado a lo largo de toda una trayectoria de luchas sociales.

En ese sentido, no es de extrañar que la figura de Salvador Allende haya resurgido en las propias marchas estudiantiles que contribuyeron a consolidar este momento. Tal como señala el historiador y urbanista Gonzalo Cáceres (2013), “es evidente que Allende se ha convertido en una figura referencial para una generación que nunca tuvo oportunidad de escucharlo o verlo” y es más, aunque “difíciles de aquilatar todavía, las movilizaciones estudiantiles del 2011 fueron decisivas en multiplicar una crítica al modelo de crecimiento. Pero, al igual que una deflagración, las esquirlas salpicaron en todas direcciones. En este caso, las movilizaciones admiten ser leídas como una crítica generacional. Al respecto, es importante destacar que Allende fue el único “político” que sobrevivió la espiral de ‘adultofobia’”. La imagen de un hombre caracterizado como Salvador Allende presente en casi todas las marchas estudiantiles de los últimos años, recibiendo el saludo y la algarabía de la concurrencia juvenil o la elección del ex presidente como “el gran chileno” del bicentenario en una votación organizada por un canal público de televisión serían prueba de ello, según el autor.

A comienzos de la década de 1990, el filósofo Martín Hopenhayn afirmaba que era indispensable no confundir la crítica a la direccionalidad de la historia de nuestro continente con el rechazo de toda direccionalidad, ya que la que necesidad de imágenes futuras continuaba siendo una necesidad, en sus palabras: “habrá que constatar lo irrecuperable y, en una misma operación, tantear lo reciclable. Si algunos mitos de emancipación o desarrollo parecen haber estallado en mil pedazos... de esos mitos siempre habrá retazos, esquirlas y jirones que proveen parte de la materia prima para elaborar nuevos proyectos colectivos” (HOPENHAYN, 1994, p. 9). La imagen de Allende proporciona en este sentido un fuerte referente de proyecto de futuro, en la medida, que su vía democrática al socialismo es un proyecto inconcluso susceptible de ser actualizado, más aún en un escenario latinoamericano que ha encontrado en su figura la inspiración para gobiernos que se han dado la tarea de superar la ola neoliberal de los años 90 (SILVA, 2015). Si bien la figura de Allende puede ser apropiada selectivamente, particularmente entre los jóvenes puede ser esgrimida también como una crítica radical al sistema político del que buscan distanciarse, no obstante, su legado está más bien asociado a una izquierda dispuesta a hacer de las luchas institucionales uno de los elementos constitutivos de su práctica política. Pero, lo relevante es que la recuperación de su nombre en este contexto implica necesariamente poner en tela de juicio las condiciones en las que se realizó la transición democrática, en donde parte importante de lo que se sienten los depositarios de su memoria, entre ellos su propio partido, más que intentar rescatar los avances realizados en su gobierno, optaron por perpetuar las lógicas heredadas de la dictadura. Aunque la figura de Allende no esté presente expresamente en la concepción programática de los cambios comprometidos en la última elección por la coalición vencedora, sí ha inspirado y servido de referente para las fuerzas sociales que no sólo han hecho posible ese triunfo como han pavimentado el camino para el nacimiento de un ciclo político que se proponga la superación del consenso neoliberal que primó sin contrapeso hasta hora tras el fin de la Dictadura.

¿HACIA UN NUEVO CICLO?

La elección presidencial de 2013 tal vez haya sido el embate electoral en el que más presencia tuvo el debate sobre la herencia dictatorial. Simbólicamente, esto también se manifestaba en el hecho de que entre las dos candidatas con mayor probabilidad de triunfo existía un vínculo que hacía imposible no referirse al pasado político reciente del que los principales protagonistas de la transición habían buscado desmarcarse. Efectivamente, tanto Michelle Bachelet como Evelyn Matthei eran hijas de Generales de la Fuerza Aérea chilena y aunque a sus padres los unió la amistad, el Golpe de Estado separaría radicalmente sus trayectorias. El General Bachelet, leal a Allende, fue encarcelado y torturado por sus pares, falleciendo producto de las complicaciones asociadas al castigo físico de los interrogatorios. Ya el General Matthei llegó a formar parte de la Junta Militar, cuando reemplazó al General Leight, tras la consolidación de Pinochet y su proyecto refundacional entre los golpistas, pero además, al inicio de la Dictadura, fue el responsable de la base en la que el General Bachelet fue torturado y terminó perdiendo la vida.

Aunque inicialmente los sectores conservadores nominaron sucesivamente dos candidatos que debieron renunciar a su delegación (uno por el descubrimiento de Cuentas Bancarias secretas en el extranjero y otro por razones de salud), finalmente se vieron obligados a confrontar en una elección presidencial a la hija de una víctima versus la hija de un victimario. Con este escenario, el clivaje del Sí/No a Pinochet resurgía inusitadamente. La derecha parecía propinarse un tiro en su propio pie, mientras que Sebastián Piñera, más preocupado de la presidencial del 2018, lejos de contribuir a evitar la derrota de su sector, le asestaba un duro golpe al pinochetismo chileno al afirmar que hubo muchos personeros (en la derecha) que fueron cómplices pasivos de la Dictadura, pues sabían lo que ocurría, pero no hicieron nada para evitarlo. Muchos interpretaron estas declaraciones como una referencia directa a la candidata Matthei y a sus aliados en el gobierno, la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La derecha estaba en una encrucijada: o le daba la espalda a la autodenominada “familia militar”, uno de los sostenes de las candidaturas presidenciales derechistas, o salía en su defensa, hipotecando con ello las chances de su candidata ante un electorado sensibilizado por la conmemoración de las cuatro décadas transcurridas desde el Golpe de Estado. Sebastián Piñera comprendía que la forma más segura de allanar su camino a La Moneda el 2018 era debilitando a los sectores más conservadores de su coalición, abriendo paso a una derecha moderna y democrática alejada de la carga de la pesada mochila de la Dictadura Militar y de las violaciones de los DDHH, el principal límite electoral de la derecha chilena. Aunque no hay como medir el efecto de las declaraciones y acciones del ex Presidente Piñera en contra de la Dictadura en el desempeño electoral de su sector, lo cierto es que éste se resintió generando divisiones internas que abrieron paso a nuevas agrupaciones partidarias y que el magro resultado electoral de la misma se vio más acentuado precisamente en aquellos sectores más alineados con el régimen militar, o sea en la UDI. El estallido de un escándalo de financiamiento político ilegal por parte de uno de los cuadros empresariales más emblemáticos de este partido, ya iniciado el gobierno de Bachelet, dejó en una posición bastante debilitada a este partido. Es posible augurar un futuro bastante adverso para la UDI, el partido que más ha resguardado el legado político de los diecisiete años del General Pinochet en poder, si a eso le sumamos el fin al Sistema Binominal (ideado por uno de los fundadores de esta agrupación durante la Dictadura, mecanismo que terminó por

favorecer a la misma en el Congreso) y la ausencia del sobre-financiamiento vía evasión de impuestos y de un sistema electoral que los sobrerrepresente.

Por otro lado, un elemento diferenciador de otras elecciones fue la consolidación de una alianza entre la antigua Concertación y el Partido Comunista para apoyar a Michelle Bachelet bajo un conglomerado que se denominó como “Nueva Mayoría”. Si bien el Partido Comunista poseía un capital electoral moderado, cerca de un 5% a nivel nacional y apenas tres diputados (gracias a un pacto electoral con la antigua Concertación que le permitió burlar las trampas del binominal que inviabilizaron su representación parlamentaria en el pasado) su apoyo simbólico no era menor. El Partido Comunista fue el actor que con mayor consistencia criticó la instauración del sistema neoliberal en Chile durante la post dictadura, cultivando un perfil social que le permitía una significativa incidencia en los movimientos sociales revitalizados en los últimos años: movimiento estudiantil, Colegio de Profesores y algunos sectores estratégicos del movimiento sindical (tercerizados del Cobre, trabajadores forestales y del sector público). Para algunos, la opción comunista de apoyar a Bachelet significaba una abdicación de su crítica al neoliberalismo, mientras que para los propios comunistas su apoyo a la ex presidenta multiplicaba su capacidad de incidir en la instauración de un gobierno que implementara las reformas necesarias para el inicio de un nuevo ciclo político que supere al neoliberalismo. El apoyo comunista permitía a la Nueva Mayoría suplir la deslegitimación que había adquirido en los gobiernos concertacionistas y fortalecía dentro de ellos a las posiciones proclives a cambios frente a los sectores dispuestos a seguir administrando el sistema neoliberal.

Las sensibilidades políticas que se habían opuesto al Gobierno de Piñera convergieron en un “compromiso histórico”, que iba desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, encabezada por un liderazgo extremadamente popular como el de Bachelet y un programa de gobierno que se comprometía a saldar cuentas con buena parte de la herencia dictatorial. Frente a éstos, una derecha desconcertada ante las nuevas exigencias de la ciudadanía, con un proyecto agotado y con un conglomerado aquejado por luchas intestinas; hacía bastante predecible el triunfo bacheletista, que finalmente ocurrió por una holgada mayoría en el balotaje, generando al mismo tiempo altas expectativas sobre las transformaciones que su gobierno podría realizar.

El comienzo del segundo gobierno de Bachelet se dio en un marco que combinaba una ciudadanía que exigía cambios significativos y una coalición de gobierno aparentemente comprometida a hacerlos. No obstante no habían especificaciones claras de los contenidos prácticos de esas reformas. ¿Eran suficientes elementos para iniciar un nuevo ciclo post-neoliberal en este país? Algunos autores cultivaban la sospecha de que existía una operación en curso destinada a replicar un nuevo cambio “gatopardista” – cambiarlo todo para que nada cambie – tal como el realizado tras el fin de la dictadura. Los anteriores gobiernos de la Concertación serían el principal antecedente para respaldar el escepticismo frente al que no sería el primer gobierno de la Nueva Mayoría, sino el quinto concertacionista, lo que sumado a la persistencia del poder de veto de los empresarios y a la mantención de lógicas subsidiarias para comprender el papel del Estado, imposibilitarían la configuración de un nuevo ciclo político capaz de superar el neoliberalismo (RUÍZ-ENCINA; BOCCARDO, 2014).

Efectivamente, más que haber sido trazado un sendero claro de transformaciones post-neoliberales, lo que este nuevo ciclo ha abierto es la disputa franca y abierta de todos los aspectos de la vida política. Tras las movilizaciones que caracterizaron el ocaso del gobierno de Piñera marcaron un retorno de la Política en el sentido más horizontal del término. En ese contexto, el gobierno de la Nueva Mayoría se ha situado como un campo de batalla en sí mismo, en el que diversas po-

siciones luchan por definir los horizontes de transformación posibles. En ese sentido, las reformas comprometidas y la llegada al gobierno de sectores dispuestos a ejecutar cambios puede ser vista como punto de partida de este nuevo ciclo, en el que aún están por definirse las condiciones concretas de navegación.

Estamos frente a un retorno de la Política en toda su expresión. Está en juego el modelo de país y los contenidos para los cambios prometidos. En otras palabras, la construcción de un nuevo orden deseado (LECHNER, 2006). De ahí la importancia de los sectores sociales que, con sus movilizaciones, contribuyeron a desmitificar el consenso neoliberal. Su rol se impone como fundamental en el nuevo proceso, compartan o no el ideario propuesto por la Nueva Mayoría, pues sin su concurso lo más probable es que la voluntad de transformación gubernamental termine en un nuevo simulacro. Sin embargo, tanto el movimiento estudiantil como el sindicato de los profesores, quienes han debido enfrentar los titubeos gubernamentales en la implementación de las reformas al sistema educacional, acabaron sucumbiendo más bien a las disputas internas. Perdieron la iniciativa a la hora de instalar los términos de los debates y transfirieron el protagonismo al Congreso, donde, por más que los movimientos sociales hayan dejado su huella – eligiendo a al menos una decena de diputados provenientes del mundo social –, ha primado los acuerdos inter-elites, reemergiendo las dinámicas de impermeabilidad institucional frente a las demandas sociales.

Por más que la hegemonía neoliberal haya sido tematizada y herida, la inercia sistémica siempre es la aliada más poderosa para la mantención del estado de cosas. Por más que el pinochetismo esté viviendo algunos de sus momentos más amargos, no se puede subestimar su capacidad para adaptarse al nuevo escenario. Sin embargo, frente a la ofensiva legislativa lanzada por el Ejecutivo, lo que significó la definición de una ambiciosa agenda de reformas (electoral, laboral, educacional, tributaria, etc.), la derecha chilena ha quedado relativamente paralizada, aunque ha ensayado un retorno a algunos actores sociales. Este es el caso, por ejemplo, del Gremio de los Dueños de Camiones que se han movilizado para exigir la aplicación de la Ley Antiterrorista en la Región de la Araucanía frente a los ataques incendiarios que han recibido aparentemente de elementos ligados a la causa Mapuche; y la articulación de los padres de alumnos de Colegios Subvencionados por el Estado que se oponían a la reforma escolar. Si el mundo social se ha pronunciado durante este gobierno, ha sido para rechazar las reformas o para mirarlas con desconfianza.

Lo anterior ha facilitado que el diagnóstico programático de que el modelo chileno no puede seguir como está, haya encontrado más oposición al interior de la Nueva Mayoría que desde la misma derecha. La inclusión de cuadros tecno-políticos proclives al consenso de la transición en puestos claves para la concepción de las reformas no ha impedido que los proyectos de cambio hayan encontrado un fuerte rechazo público entre algunos intelectuales emblemáticos de la antigua Concertación, notablemente en lo que respecta a su oposición a la reforma educacional y a la gratuidad universitaria en particular.

Aunque el programa de la Nueva Mayoría se presentó como la carta de navegación para orientar al gobierno, las vaguedades que este presentaba han dado pie para una serie de titubeos a la hora de definir el tenor de las diversas reformas. Aunque transcurrido un año del inicio de su segundo gobierno, la presidenta Bachelet tenía un saldo más que positivo para realizar: una reforma tributaria que, aunque modesta y mediada por un acuerdo inter-elite que le restó más alcance, reintroducía un criterio redistributivo; y una reforma política que acababa con uno de los principales cerrojos institucionales de la dictadura, el sistema binominal. Con esos dos hitos, en su primer año, el gobierno de la Nueva Mayoría había avanzado más que cualquier gobierno de la

Concertación en desembarazarse de la herencia política de la Dictadura y no conforme con ello se aprestaba para un segundo año en el que la Reforma Educacional sería la protagonista (desmunicipalización, Carrera Docente y gratuidad universitaria).

Sin embargo, esa evaluación pasó a un segundo plano cuando el “Caso Caval”, operación de especulación inmobiliaria con tráfico de influencia en el que estaban implicados el hijo de la presidenta y su esposa, tomó la agenda pública y terminó por salpicar a la propia jefa de Estado. Este caso aparecía en momentos en que una serie de juicios laborales habían develado una sistemática evasión de impuestos por parte de algunas empresas a través del financiamiento espurio a los principales partidos políticos del país. La emisión de boletas ideológicamente falsas para abultar los gastos de las empresas como PENTA (ligada a la UDI) y SOQUIMICH (ex empresa pública controlada por el ex yerno del General Pinochet), para así reducir su carga impositiva, se había extendido a tal punto que llegaba incluso al círculo más próximo de la Presidenta. La salida del Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo del Gabinete, su brazo derecho, sería la principal evidencia de esa crisis política. Al ex Secretario de Estado no se le perdonó la emisión pasada de Boletas por servicios aparentemente no prestados, sino que además se le responsabilizó por no haberle advertido a la presidenta hasta dónde esta crisis podría escalar. Lo que, a fin de cuentas, terminó por costarle una estrepitosa pérdida de valoración política a la presidenta, la que llegó rápidamente al nivel más bajo de popularidad desde el retorno a la democracia. La captura empresarial de la esfera política quedaba en evidencia.

Cuando el ex ministro Rodrigo Peñailillo le recomendaba a Bachelet no suspender sus vacaciones por el Caso Caval ¿subestimaba el papel corrosivo que el caso podría tener o sobreestimaba un capital político que hasta ese minuto parecía incombustible? El ex Ministro no hizo más que aplicar un criterio de actuación que hasta cierto punto tiene su origen en la máxima comunicacional que marcaría el éxito de la antigua Concertación “la mejor política comunicacional es no tenerla”. En el caso de Bachelet, eso se traducía en una lógica de protección de su capital político mediante la no exposición y en la confianza en sus atributos (credibilidad y cercanía) para sortear cualquier crisis. No obstante, cuando un liderazgo se construye principalmente en base a características personales son altos los riesgos que se corren: “Del mismo modo en que la política de la personalidad es una desviación del interés público fuera de la consideración del carácter personal en función de la acción efectiva, así, como todos los elementos del carácter se vuelven simbólicos sin ningún referente real, cualquier defecto puede transformarse súbitamente en un instrumento para la auto-destrucción” (SENNETT, 2002, p. 624).

Tal como señalara Pierre Bourdieu (1984), el capital político es un tipo de capital simbólico basado en la reputación y notoriedad que, en tanto acto de fe, precisa ser permanentemente renovado. Por tanto, el político es un tipo de capital que no se puede poner ni debajo del colchón ni en la bóveda de un banco sin la inminencia de la desvalorización progresiva. El capital político debe circular y ser arriesgado constantemente, su naturaleza es dinámica e inestable: fácil puede venir, fácil se va y difícil es recuperarlo. Michelle Bachelet parecía ser hasta ahora una extraordinaria excepción a esta idea, aunque se aprestaba a arriesgar su capital político en una serie de reformas que, a pesar de la mayoría parlamentaria con la que contaba, no dejarían de mermarla (por la presión de los que no quieren cambios y de los que quieren que sean más profundos). No obstante, su capital político se desvaneció sin siquiera iniciar la discusión de las reformas más complejas (educacional, laboral y constitucional) y por razones totalmente ajenas a su carta de navegación (el programa de gobierno).

Si se considera a Michelle Bachelet como una de las principales fuentes de legitimidad que le quedaban al actual sistema político, que viene acumulando niveles de vaciamiento y desafección crecientes, entonces cabe preguntarse si acaso la súbita pérdida de popularidad de la presidenta no contribuye a acelerar la necesidad de un cambio que relegitime la política chilena, antes que se produzca un salida por fuera de la institucionalidad, por ejemplo a través de algún proyecto neo-populista. La propia mandataria dio luces sobre ello al anunciar el inicio de un proceso constituyente que dote a Chile de una Constitución democrática. Si bien en una nueva Constitución no están las respuestas a todos los males de una sociedad, la generación de un nuevo pacto político-social que refunde las reglas que la sociedad se da para ordenar la convivencia colectiva en democracia es indispensable para re-aproximar a la sociedad civil con la política. El mecanismo empleado para eso no es secundario, ya que una restricción a la participación ciudadana podría mermar el potencial relegitimador de una nueva Carta Fundamental. Transferir el ejercicio soberano constituyente desde el pueblo a un Congreso en franco descrédito o a un grupo de expertos, que es lo que con más fuerza se baraja desde el gobierno, podría más bien ampliar la distancia entre el sistema político y aquél. Sin embargo, por más que la brecha abierta el año 2011 haya enriquecido la institucionalidad política mediante la incorporación de algunos dirigentes sociales al parlamento, la tendencia a la clausura semántica del Congreso se ha rehabilitado gracias a la indecisión del ejecutivo y al ciclo descendente de movilización de los movimientos sociales.

Con todo, las movilizaciones sociales han cambiado la cara de la política chilena y aunque Chile parece recién iniciar un ciclo que tematiza las categorías fundamentales del periodo neoliberal, a diferencia de otros países donde la encrucijada está en la radicalización y superación de las premisas de los gobiernos redistributivos que gobiernan hace más de una década hacia una gramática de derechos colectivos, el desafío no parece ser tan diferente para el país andino: ¿cómo transformar las explosiones de ciudadanía instituyente en ciudadanía instituida? (DOMINGUES, 2013). El sistema político aparentemente camina hacia lógicas autorreferenciales que lo insensibilizan a las demandas sociales, pero su agenda opera a partir de las categorías que las dinámicas sociales instalaron. Es posible que finalmente la clausura se mantenga y las reformas sean desvirtuadas o se limite aún más su alcance, pero eventualmente el cierre del sistema político puede perjudicar más al propio campo político, pavimentando el camino para proyectos alternativos refundacionales.

Sea cual sea el escenario, parece que en Chile la transición democrática desprovista de actores sociales llegó a su fin. Al menos, en el mediano plazo los movimientos sociales jugarán un papel potencialmente determinante en la definición de los cursos que tomará la política de ese país. La sociedad chilena da muestras de disponerse a construirse a sí misma y, aunque lo viejo aún no muera y lo nuevo no termine de nacer – como reza la célebre fórmula gramsciana –, Chile se enfrenta a un nuevo ciclo que tiene la virtud de dejar todas las posibilidades abiertas.

REFERENCIAS

- AGAMBEN, G. **Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life**. Standford California: Standford University Press, 1998.
- AGUILERA, S. (ED.). **El Terremoto Social del Bicentenario**. Santiago: LOM, 2010.
- AMSDEN, A. **The Rise of “The Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies**. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- ARIZTÍA, T.; BERNASCONI, O. Sociologías públicas y la producción del cambio social en el Chile de los noventa. In: ARIZTÍA, T. (Ed.). **Produciendo lo social: usos de las ciencias sociales en el Chile reciente**. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012. p. 133–163.
- AZÓCAR, C. El movimiento estudiantil chileno: balances y perspectivas. El giro sociopolítico en el nuevo escenario electoral. **ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL**, v. 0, n. 0, p. 341–358, 2013.
- BARTELS, L. **Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age**. Princeton: Princeton, Russell Sage Foundation/Princeton University Press, 2008.
- BEIGEL, F. Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento. **Nueva Sociedad**, n. 245, p. 110–123, 2013.
- BIELSCHOWSKY, R. **Cinquenta anos de Pensamento na CEPAL - Uma Resenha**. Rio de Janeiro: Record/CEPAL/Confecon, 1998.
- BOLTANSKI, L.; CHIAPELLO, E. **El nuevo espíritu del capitalismo**. Madrid: Akal, 2002.
- BOSCHI, R. (ED.). **Variedades de Capitalismo, Política e Desenvolvimento na América Latina**. Belo Horizonte: UFMG, 2011.
- BOURDIEU, P. La délégation et le fétichisme politique. **Actes de la recherche en sciences sociales**, v. 52, n. 52-53, p. 49–55, 1984.
- BOURDIEU, P. **Pierre Bourdieu. Seis artículos publicados en Le Monde Diplomatique**. Santiago de Chile: Aún creemos en los sueños, 2002.
- BOURDIEU, P.; PASSERON, J.-C. **La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza**. [s.l.] Editorial Popular, 2001.
- CÁCERES, G. La allendización: ¿apenas un adhesivo melancólico? | Red Seca. **Red Seca**, 17 jul. 2013.
- CÁCERES, G.; MILLÁN, R. Crisis urbana sin terremoto social: los saqueos bicentenarios del 2010. In: BUSTO, A.; RODRÍGUEZ, R. (Eds.). **Postales de América Latina: Problemas latinoamericanos en el siglo XX**. Ayacucho: Libros del Espinillo, 2012. p. 191–203.
- CAPUTO, O.; RADRIGÁN, J.; GALARCE, G. Manifiesto del cobre: el cobre es chileno y debe ser explotado en beneficio de los chilenos. **Chiapas**, n. 15, 2003.
- CASALS, M. **El alba de una revolución: la izquierda y el proceso de construcción**

estratégica de la “vía chilena al socialismo” 1956-1970. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2010.

- CASTAÑEDA, J. Latin America's Left Turn. **Foreign Affairs**, v. 85, n. 3, 2006.
- CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede.** Sao Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. v. I
- CASTELLS, M. **Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial.** Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2005.
- CORTÉS, A. La Reprimarización del Modelo de Desarrollo Chileno. **Oikos (Rio de Janeiro)**, v. 11, n. 1, p. 63–86, 2012.
- DAS, V. Fronteiras, violências e o trabalho do tempo: alguns temas wittgensteinianos. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 14, n. 40, p. 31–42, 1999.
- DEVÉS VALDÉS, E. **El pensamiento latinoamericano en el siglo XX: Entre la modernización y la identidad.** Buenos Aires: Biblos - Centro de Investigaciones Barros Arana, 2004. v. 3
- DOMINGUES, J. M. **A América Latina e A Modernidad Contemporânea.** Belo Horizonte: UFMG, 2009.
- DOMINGUES, J. M. Las movilizaciones de junio de 2013: ¿explosión fugaz o novísima historia de Brasil? **OSAL Observatorio Social de América Latina**, v. XIV, n. 34, p. 62–72, 2013.
- ESPINOZA, V.; NUÑEZ, J. Movilidad ocupacional en Chile 2001-2009 ¿Desigualdad de ingresos con igualdad de oportunidades? **Revista Internacional de Sociología**, v. 72, n. 1, p. 57–82, 2014.
- FAZIO, H. **Mapa actual de la extrema riqueza en Chile.** Santiago de Chile: LOM Ediciones, 1997.
- FAZIO, H. **Lagos: El Presidente “progresista” de la Concertación.** Santiago: LOM, 2006.
- GÁRATE, M. **La Revolución Capitalista de Chile (1973-2003).** Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012a.
- GÁRATE, M. El nuevo estatus del economista y el papel de los think tanks en Chile: el caso de CIEPLAN. In: ARIZTÍA, T. (Ed.). **Produciendo lo social: usos de las ciencias sociales en el Chile reciente.** Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012b. p. 101–129.
- GARCÉS, M. Los Secundarios en Movimiento: el retorno a la historia social de Chile. In: AUTORES, V. (Ed.). **Me gustan los estudiantes.** Santiago: LOM, 2006. p. 45–57.
- GARCÉS, M. Terremoto Natural y Terremoto Social en Chile. In: AGUILERA, S. (Ed.). **El Terremoto Social del Bicentenario.** Santiago: LOM, 2010. p. 67–86.
- GARCÉS, M. **El despertar de la sociedad: los movimientos sociales en América Latina y Chile.** Santiago: LOM, 2012.
- GARRETÓN, M. A. **Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los gobier-**

- nos de la Concertación en Chile, 1990-2010.** Santiago de Chile: Editorial AR-CIS - CLACSO - Desconcierto, 2012.
- GOHN, M. DA G.; BRINGEL, B. (EDS.). **Movimentos sociais na era global.** Rio de Janeiro: Vozes, 2012.
- GRAMSCI, A. **Cadernos do Cárcere – Vol. 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
- GREZ, S. Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile. **The Clinic**, 9 jan. 2011.
- GUNDER FRANK, A. **Capitalismo y subdesarrollo en América Latina.** Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1973.
- GUNDER FRANK, A. **Lumpenburguesía: lumpendesarrollo.** Tercera ed. Ciudad de México: Era, 1978.
- HINER, H. Voces soterradas, Violencias Ignoradas: Discursos, violencia política y género en los Informes Rettig y Valech. **Latin American Reserach Review**, v. 44, n. 3, p. 50–74, 2009.
- HOPENHAYN, M. **Ni Apocalípticos ni Integrados: Aventuras de la Modernidad en América Latina.** México: FCE, 1994.
- HUNEEUS, C. **La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet.** I. ed. Santiago: Taurus, 2014.
- JACKSON, G. El movimiento estudiantil y los cambios. **Le Monde Diplomatique**, out. 2011.
- KIELY, R. **The New Political Economy of Development: Globalization, Imperialism, Hegemony.** Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.
- KLEIN, N. **La Doctrina del Shock: el auge del capitalismo del desastre.** Barcelona: Paidós, 2007.
- LANDSBERGER, H.; MCDANIEL, T. Hypermobilization in Chile, 1970-1973. **World Politics**, v. 28, n. 4, p. 502–541, 1976.
- LECHNER, N. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. In: LECHNER, N. (Ed.). **Obras Escogidas I.** Santiago: LOM Ediciones, 2006. v. 1p. 137–333.
- LÓPEZ, R.; FIGUEROA, E.; GUTIÉRREZ, P. La “parte del león”: Nuevas estimaciones de la participación de los super-ricos en el ingreso de Chile. **Economía**. p. 32, 2013.
- LUHMANN, N. **Poder.** Madrid: Universidad Iberoamericana - Anthropos, 2005.
- LUZIO, C.; GÓMEZ, P. Movimiento estudiantil: Propuestas analíticas desde la sociología chilena. **Kütral Revista de Sociología y Pensamiento Latinoamericano**, n. 8, p. 43–72, 2014.
- MASSARDO, J. La significación histórica del movimiento estudiantil. **Rebelión**, 2011.
- MAYOL, A. **El derrumbe del modelo: la crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo.** Santiago: LOM, 2012.

- MERTON, R. **Sociologia: Teoria e Estrutura**. Sao Paulo: Mestre Jou, 1970.
- MOISÉS, Á. O Estado, as contradições urbanas e os movimentos sociais. In: MOISÉS, Á. (Ed.). **Cidade, Povo e Poder**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 14–29.
- MOULIAN, T. **Chile Actual: Anatomía de un mito**. Santiago: LOM, 2002.
- NEVES, M. Entre Subintegração e Sobreintegração: A Cidadania Inexistente. **DADOS**, v. 37, n. 2, p. 253–276, 1994.
- NEVES, M. **A Constitucionalização Simbólica**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- ORTEGA, J. Movilizaciones estudiantiles: Lecciones de cívica con uniforme. In: AUTORES, V. (Ed.). **Me gustan los estudiantes**. Santiago: LOM, 2006. p. 5–26.
- PAIRICÁN, F. **Malón: La rebelión del movimiento Mapuche 1990-2013**. Santiago de Chile: Pehuén, 2014.
- PALMA, G. El Equipo Económico de Bachelet es Ideal si Sólo se Quiere Hacer Más de lo Mismo. **Estrategia**, de 2014.
- PIETERSE, J. N. **Development Theory: Deconstructions/Reconstructions**. London: Sage Publications, 2001.
- RAMIS, Á. Breve historia del movimiento estudiantil chileno. **Punto Final**, 19 ago. 2011.
- RIBEIRO, D. **Ensaio insólitos**. Rio de Janeiro: Ludens, 2011.
- RICHARD, N. **La insubordinación de los signos (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis)**. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2000.
- ROJO, G. Saqueos. In: AGUILERA, S. (Ed.). **El Terremoto Social del Bicentenario**. Santiago: LOM, 2010. p. 103–114.
- ROVIRA KALTWASSER, C. Chile: transición pactada y débil autodeterminación colectiva de la sociedad. **Revista mexicana de sociología**, v. 69, n. 2, p. 343–372, jun. 2007.
- RUÍZ-ENCINA, C.; BOCCARDO, G. Amèrica Llatina davant una nova cruïlla? **ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL**, v. 0, n. 0, p. 765–783, 2014.
- SALAZAR, G. **La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”: La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular)**. Santiago: LOM, 2006.
- SALAZAR, G. **Movimientos Sociales en Chile: Trayectoria histórica y proyección política**. Santiago: Uqbar, 2013.
- SANTA CRUZ, E. Reparando las grietas del edificio social. Poder mediático y hegemonía en Chile. In: AGUILERA, S. (Ed.). **El Terremoto Social del Bicentenario**. Santiago: LOM, 2010. p. 205–226.
- SENNETT, R. **El declive del hombre público**. Barcelona: Editorial Península, 2002.
- SILVA, F. P. D. State, Social Movements, and Democracy in the Andean Countries. **Journal of Civil Society**, v. 11, n. 3, p. 259–270, 3 jul. 2015.

- SINGER, P. De dependência em dependência: consentida, tolerada e desejada. **Estudos Avançados**, v. 12, n. 33, p. 119–130, maio 1998.
- TAPIA, L. **Política Salvaje**. La Paz: CLACSO/Muela del Diablo/Comuna, 2008.
- THIELEMANN, L. Hijos de Recabarren, hijos de la transición: sobre las JJCC y la anomalía estudiantil de los 90. In: ÁLVAREZ, R.; LOYOLA, M. (Eds.). **Un trébol de cuatro hojas: las juventudes comunistas de Chile en el siglo XX**. Santiago de Chile: Ariadna, 2014.
- TIRONI, E.; AGÜERO, F.; VALENZUELA, E. Clivajes políticos en Chile: perfil sociológico de los electores de Lagos y Lavín. **Perspectivas**, v. 5, n. 1, p. 73–87, 2001.
- TODOROV, T. **Em face do extremo**. São Paulo: Papyrus, 1995.
- TRICOT, T. **Autonomía: el movimiento mapuche de resistencia**. Santiago de Chile: CEIBO, 2013.
- VALDÉS, J. G. **Pinochet's Economists: The Chicago School of Economics in Chile**. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- VALDIVIA, V. **El golpe después del golpe: Leigh versus Pinochet. Chile 1960-1980**. Santiago: LOM, 2003.
- VERDUGO, P. (ED.). **De la tortura no se habla: Agüero versus Meneses**. Santiago: Catalonia, 2004.
- VILLALOBOS, C.; QUARESMA, M. L. Sistema escolar chileno: características y consecuencias de un modelo orientado al mercado. **Convergencia Revista de Ciencias Sociales**, v. 22, n. 69, p. 63–84, 27 ago. 2015.
- ZAPATA, F. De la democracia representativa a la democracia “protegida”. Movimiento obrero y sistema político en Chile. **Revista Enfoques**, n. 3, p. 125–155, 2004.

EDIÇÕES ANTERIORES

- Caderno de Trabalho Netsal v2. n.6 (2014) – A sociologia como profissão no Brasil e na Argentina, *Pedro Blois*
- Caderno de Trabalho Netsal v2. n.5 (2014) – Movimientos sociales y gobiernos en América Latina: nuevos escenarios, tipología de relaciones y formas Estado/movimiento, *Breno Bringel y Alfredo Falero*
- Caderno de Trabalho Netsal v2. n.4 (2014) – Fronteiras turvas: sociedade e Estado no Trópico de Cochabamba, Bolívia, *Alice Soares Guimarães*
- Caderno de Trabalho Netsal vl. n.3 (2013) – A tradição das Refundações, *Fabricio Pereira da Silva*
- Caderno de Trabalho Netsal vl. n.2 (2013) – Imaginário e Política na Modernidade, *José Mauricio Domingues*
- Caderno de Trabalho Netsal vl. n.1 (2013) – Participação, Poder e Democracia, *Sara Deolinda Cardoso Pimenta*

